

2010

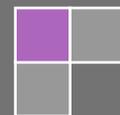
# Uribe y la internacionalización del conflicto interno armado colombiano

Silvia Quintanar & Carolina Von Oertel

El artículo analiza el conflicto interno colombiano y su polémica internacionalización durante los dos mandatos presidenciales de Álvaro Uribe. Los componentes de la llamada Política de Seguridad Democrática, la relación privilegiada con Estados Unidos y su colaboración en la lucha contra el narcotráfico pero más específicamente su carácter contrainsurgente, involucraba también la cooperación de los países vecinos, en los términos pautados por la conveniencia del gobierno colombiano. La concepción uribista de ir por los “terroristas” allí donde se encuentren, generó graves incidentes con los países fronterizos, Ecuador y Venezuela, y el acuerdo militar con Estados Unidos implica un desagradable desafío a Brasil y el Consejo de Defensa Sudamericano. Las consecuencias de la Política de Seguridad Democrática han sido objeto de debate en las instituciones internacionales: OEA, Grupo de Río y UNASUR.

Jornadas de Relaciones Internacionales  
“Poderes emergentes: ¿Hacia nuevas formas de concertación Internacional?”

Área de Relaciones Internacionales -  
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales



**Silvia Quintanar** es Profesora de Geografía, Magíster en Relaciones Internacionales, Profesora titular del Departamento de Relaciones Internacionales y Directora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro, República Argentina. Co-directora del Grupo de Investigación Mercosur y Relaciones Internacionales.

**Carolina Von Oertel** es Licenciada en Relaciones Internacionales. Magister en Relaciones Internacionales.

### *El relevo presidencial en el 2002: Uribe y la política de “mano firme”*

El fracaso de los diálogos con la guerrilla y el desbordamiento de la violencia a finales del mandato de Andrés Pastrana (1999-2002) sumieron a muchos colombianos en el pesimismo.

Durante el año 2001 el candidato a la presidencia Álvaro Uribe divulgó sus propuestas de cambio de rumbo con una contundencia grata a una buena parte de un electorado cansado de la violencia y la inseguridad, expresado en su programa de gobierno encabezado por el lema “Mano Firme y Corazón Grande”.

El político medellinense discrepó con la manera en que Pastrana había manejado el proceso de paz con las FARC y con el “área de despeje” cedida a la guerrilla a los fines de la negociación. Uribe no sólo consideraba esta cesión previa una claudicación intolerable del Estado, sino que apostaba por someter a los grupos insurgentes al imperio de la ley. Por ejemplo, Uribe se alejó de los demás candidatos cuando manifestó no oponerse a que tropas extranjeras combatieran el narcotráfico y la guerrilla.

El impacto de la política global antiterrorista de Estados Unidos post 11

de septiembre y la ruptura del proceso de paz, ocurrida en febrero de 2002, determinaron que a sólo dos meses de las elecciones, los demás candidatos se apresuraran a asumir el discurso de mano dura contra los grupos violentos, mudanza que perfiló a Uribe como candidato que siempre había asumido esa posición. Uribe se alzó con la victoria en primera vuelta obteniendo el 53,1% de los votos.

El presidente electo que asumió en agosto de 2002 trazó dos objetivos concatenados para cumplir durante su mandato: en primer lugar el proyecto de Seguridad Democrática que constituye la piedra angular sobre la que descansa la ofensiva interna contra los grupos insurgentes; y por último una política de contraposición con el anterior gobierno a través de la cual se busca introducir el conflicto colombiano en la agenda regional.

### *La Política de Defensa y Seguridad Democrática*

La administración Uribe, al mismo tiempo que decide continuar con los compromisos asumidos por la administración Pastrana bajo el Plan Colombia, necesita mostrar un cambio

en la posición política frente al conflicto armado y endurecer la confrontación militar con los grupos guerrilleros. Dicho giro lo constituye la Política de Seguridad Democrática presentada en noviembre de 2002 como pilar del nuevo gobierno.

Si bien en principio la Política de Seguridad Democrática se presenta como complementaria del Plan Colombia, en realidad este último termina diluyéndose en la Política de Seguridad Democrática<sup>1</sup>.

En la carta del Presidente de la República con la que se encabeza el documento mediante el cual el Gobierno Nacional traza las líneas básicas de su estrategia, Álvaro Uribe Vélez manifiesta que la Seguridad Democrática es la que se requiere para garantizar la protección de los ciudadanos.

La antípoda de la política democrática es el terrorismo al que Uribe promete derrotar actuando con absoluta determinación con la colaboración de la Fuerza Pública y la ciudadanía. Centraliza su programa en la solidaridad, solidaridad entre los ciudadanos, solidaridad de los ciudadanos con la fuerza pública y

solidaridad de otros países de la región para frenar el terrorismo allí donde se encuentre y su aliado el narcotráfico<sup>2</sup>.

Lograr el completo control territorial por parte del Estado es el primer objetivo estratégico, para ello propone el aumento de la fuerza pública (Fuerzas Armadas y Policía) y el involucramiento de la sociedad civil a través de una red de informantes y cooperantes (por ejemplo batallones de soldados campesinos).

En el terreno de los 6300 kilómetros de fronteras pretende involucrar de distintos modos a países vecinos: primero a través de la condena a las FARC, que no fue aceptada por Brasil y Venezuela, luego la adopción del cierre y monitoreo de fronteras, y la adopción de mecanismos de coordinación y acción conjunta a nivel militar (Memorandums de Entendimiento, comunicaciones frecuentes e intercambio de información).

Su premisa básica es que el único camino que se le puede ofrecer a los grupos armados entre los que formalmente no hace distinción llamándolos terroristas u organizaciones

<sup>1</sup> Diana Marcela Rojas: *Plan Colombia II: ¿más de lo mismo?* Revista Colombia Internacional. N° 65. Bogotá.  
<http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/viaw.php/89/1.php>. Bajado 21.09.2007.

<sup>2</sup> Álvaro Uribe Vélez. *Carta del Presidente de la República*. En *Política de defensa y Seguridad Democrática*. Presidencia de la República. Ministerio de Defensa Nacional. República de Colombia 2003.

armadas ilegales es el alto al fuego sin condiciones y la desmovilización.

En consecuencia, los fundamentos del proyecto de Seguridad Democrática atienden a tres aspectos cruciales que están íntimamente relacionados. En primer lugar está el objetivo de asegurar al máximo el control territorial como condición indispensable para el fortalecimiento del Estado de Derecho, disputándole a los grupos insurgentes los espacios bajo su tutela y por supuesto, eliminando excepciones como la zona de despeje que en su momento ofreció Pastrana a las FARC. Segundo, lograr la completa desarticulación de las llamadas organizaciones terroristas. Y tercero, lograr un debilitamiento de las fuentes de financiamiento que permiten el mantenimiento de los grupos armados como son el secuestro, la extorsión y principalmente el narcotráfico<sup>3</sup>.

La postura dura de Uribe, en términos de seguridad y defensa, se estructura así en armonía con las directrices establecidas por Washington.: la denominación de terroristas a todos los grupos ilegales sin distinción, la fuerza pública como elemento medular en el combate y la derrota al terrorismo y el

imprescindible apoyo de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de drogas y la violencia terrorista mancomunadas<sup>4</sup>.

Las líneas de acción trazadas en el documento dejan entrever claramente estrategias que apuntan al incremento extensivo e intensivo de las fuerzas militares y policíacas en todo el territorio nacional.

La Seguridad Democrática, bajo esta perspectiva, tiene un enfoque cuyo criterio central es el recurso a la fuerza militar, y en el que se trivializan, como parte de una estrategia integral para enfrentar el conflicto, campos esenciales de naturaleza económica y social. No obstante existir en el Plan Nacional de Desarrollo<sup>5</sup>, un conjunto de estrategias orientadas hacia estos campos, la acción del Estado colombiano, bajo la jefatura de Uribe Vélez, le ha otorgado un peso mayor al fortalecimiento militar y a la estrategia de guerra que a los propósitos de contrarrestar las condiciones de pobreza, desempleo e inequidad social.

En cuanto a la Fuerza Policial las prioridades pasan por profundizar su presencia en las zonas rurales y en las

<sup>3</sup> República de Colombia, Presidencia de la Nación, Ministerio de Defensa de la Nación - Política de Defensa y Seguridad Democrática, Noviembre, 2002, pp.32-33. Disponible en [www.minidefensa.gov.co](http://www.minidefensa.gov.co)

<sup>4</sup> Política de Defensa y Seguridad Democrática, op. cit., pp. 20-21 y 62-63

<sup>5</sup> República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. Disponible en : [www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co)

carreteras, reforzar los cuerpos policiales, fortalecer su capacidad técnica, y construir redes de cooperación ciudadana<sup>6</sup> para apoyar la fuerza pública con frentes locales de seguridad. Asimismo el documento pone especial hincapié en el fortalecimiento de las actividades desarrolladas por las agencias de seguridad e inteligencia para dismantelar las estructuras y el apoyo logístico de las organizaciones terroristas y la criminalidad organizada<sup>7</sup>.

Como se desprende de este breve análisis del documento de Política de Defensa y Seguridad Democrática, el gobierno colombiano aplica una política de seguridad unidimensional que prioriza lo militar, de modo que tiende a militarizar la sociedad y subordina las libertades a las necesidades del fortalecimiento de las instituciones del Estado.

Todas las medidas revelan una concepción militar de la seguridad y estrategias que orientan a la profundización de la guerra como una

manera de enfrentar el conflicto armado interno y no a la solución política y negociada. Sin lugar a dudas, el vacío más grande de esta política es la carencia de una propuesta seria y pública de negociación con las organizaciones guerrilleras. En la práctica la negociación es sólo con los paramilitares.

### *La política exterior de Uribe y la relación especial con Estados Unidos*

La política exterior del gobierno de Álvaro Uribe no registró cambios importantes con respecto a la administración Pastrana, sino que, por el contrario, ha sido más enfática en la vinculación del conflicto colombiano a la cruzada global antiterrorista, con lo cual su alineamiento con la política estadounidense ha sido aún más estrecho. Prueba de ello fue la decisión de Colombia de sumarse a la coalición de países que respaldaron a los Estados Unidos en la guerra contra Irak, con el argumento de que el país no podía reclamar solidaridad internacional frente a su propia lucha antiterrorista sin estar dispuesto a brindar su apoyo para atacar este flagelo en otras latitudes.

---

<sup>6</sup> Se pretende implementar un esquema similar al de “Neighbourhood Watch” en Australia y el Reino Unido, que consiste en una red de ciudadanos voluntarios tanto en zonas rurales como urbanas, capaces de brindar información que permita la prevención y la persecución del delito. Los cooperantes responden al principio de solidaridad y a diferencia de los informantes su cooperación no es remunerada. *Política de Defensa y Seguridad Democrática*, op. cit., p. 61

<sup>7</sup> *Política de Defensa y Seguridad Democrática*, op. cit., pp. 38-41

Uno de los efectos tangibles más representativos de la inserción del conflicto armado colombiano en la lógica de la guerra antiterrorista tiene que ver con el carácter de la ayuda militar que Estados Unidos le brinda a Colombia.

En primer lugar, se desdibujó por completo la distinción que Washington había establecido tradicionalmente entre actividades antinarcoóticos, a las cuales se destinaba dicha asistencia, y la lucha contra la insurgencia. A finales de julio de 2002, el Congreso estadounidense levantó las restricciones existentes para el uso de los equipos militares otorgados por medio del Plan Colombia, autorizando su utilización para la lucha contra el terrorismo.

Segundo, por primera vez desde la finalización de la Guerra Fría, Estados Unidos aceptó financiar actividades militares no relacionadas con la lucha contra las drogas en Colombia. Ejemplo de esto son los programas de protección militar del oleoducto Caño Limón-Coveñas, operado por Occidental Petroleum en asociación con Ecopetrol y los planes “Patriota” y “Victoria”.

De lo expuesto se desprende que Colombia no sólo sigue manteniendo una relación especial, estratégica con Estados Unidos, sino que la misma se ha

profundizado y ampliado a causa de la lucha contra las drogas ilícitas y sus delitos relacionados y más recientemente en el marco de la cooperación en la lucha contra el terrorismo<sup>8</sup>.

Por otra parte se mantendrá el impulso simultáneo de la agenda comercial económica (Consenso de Washington, ALCA/TLC, estabilidad jurídica) íntimamente relacionada a la agenda de seguridad que se impulsa a través de otros medios.

A pesar de la vigencia de una relación bilateral privilegiada, la interacción entre Colombia y Estados Unidos no ha estado exenta de algunas dificultades. La grave situación de los derechos humanos en el país ha sido una fuente constante de preocupación entre diferentes sectores del ejecutivo estadounidense, el Congreso y otros sectores que influyen en la formulación de la política exterior norteamericana.

Uribe ha centrado su política exterior en una búsqueda pragmática de ayuda internacional para resolver el conflicto armado y el problema del narcotráfico.

---

<sup>8</sup> República de Colombia - Documento del Ministerio de Relaciones Exteriores: **Política Exterior de Colombia: gobernabilidad democrática, responsabilidad compartida y solidaridad**. Bogotá, Fondo Editorial Cacillería de San Carlos. Diciembre, 2003, p. 37. Disponible en [www.mirelext.gov.co](http://www.mirelext.gov.co)

En varias oportunidades, ha efectuado solicitudes de igual tenor apelando a un posible despliegue de fuerzas similares a las enviadas a la guerra contra Irak. Durante la asunción del Presidente de Ecuador Lucio Gutiérrez en enero de 2003, Uribe impulsó la iniciativa ante sus colegas latinoamericanos a favor de un “despliegue por cielo y por mar de una fuerza multilateral liderada por Estados Unidos para combatir la droga y el terrorismo en Colombia, que pueden destruir la Amazonia e impactar en toda la región sudamericana”<sup>9</sup>.

Un mes más tarde, ante el atentado perpetrado en el selecto Club El Nogal en la ciudad de Bogotá, que dejara un saldo de 32 muertos y unos 200 heridos, insistió nuevamente pronunciando que: “el mundo no debe pedir a Colombia que tenga consideraciones con el terrorismo, necesitamos que las naciones democráticas vengan a Colombia a ayudarnos a combatirlo, necesitamos que así como se está decidiendo en Naciones Unidas el tema de Irak, el mundo tome la decisión de ayudar en Colombia”<sup>10</sup>.

En este mismo sentido, en la jornada inaugural del Grupo de Río en la ciudad

<sup>9</sup> “Uribe pide en Colombia un despliegue como en Irak”, en *La Nación*, 16 de enero de 2003

<sup>10</sup> “Uribe pide una intervención internacional en Colombia” en *Clarín*, 9 de febrero de 2003

de Cuzco, en el año 2003, Uribe “pidió ayuda internacional para hacer frente al conflicto armado en su país y demandó a las Naciones Unidas *que les exijan a las FARC sentarse a negociar sino quieren enfrentar una acción militar con apoyo de países extranjeros que colaborarán para enfrentar a las narcoguerrillas*”<sup>11</sup>.

Las relaciones de Colombia con la ONU son más bien tensas. Por su naturaleza, esa organización es más afín a las negociaciones de paz que a los esfuerzos de seguridad de Uribe, quien no ha escatimado críticas a la entidad así como solicitudes tan insistentes como inviables. De la OEA, en cambio, Uribe consiguió la condena de los actos terroristas cometidos por las organizaciones ilegales y en particular por el mencionado atentado en el Club El Nogal, que según fuentes oficiales fue perpetrado por las FARC. Asimismo, ha recibido de la OEA un valioso aval político y el apoyo en las negociaciones con las AUC<sup>12</sup>.

### *El primer mandato de Uribe (2002-2006)*

<sup>11</sup> “Uribe pide a la ONU que presione a las FARC”, en *La Nación*, 24 de mayo de 2003

<sup>12</sup> Restrepo, Luis A.: “La difícil recomposición de Colombia”, en *Revista Nueva Sociedad*, Fundación Foro Nueva Sociedad, Bs. As. N° 192, Julio-Agosto, 2004, p.51

### *Implicancias de la estrategia de Uribe sobre sus vecinos*

Comparadas con las tensiones regionales que el accionar del gobierno de Uribe generó en sus vecinos y en la región en su segundo mandato, los conflictos y divergencias suscitados durante el primer mandato fueron de gravedad, aunque no anticiparon las tensiones que se desataron después.

Desde su posesión el presidente Uribe se esforzó por comprometer a los gobiernos de los países vecinos con su estrategia de seguridad, habiendo alcanzado algunos acercamientos y acuerdos con ellos en este campo, pero habiendo generado también, fuertes reacciones negativas, que limitan el alcance y la perduración de tales pactos<sup>13</sup>.

Una de las fuentes de rechazo entre los vecinos deriva de la percepción de que Uribe, guiado por la consideración pragmática de que Estados Unidos es el único que puede ayudar a responder la ofensiva armada interna, ha decidido atarse a un sistema internacional unipolar. El fuerte rechazo que han despertado el Plan Colombia y la Política de Defensa y Seguridad Democrática y

últimamente el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, se ha debido, entre otras razones, a que se los considera como parte de la estrategia regional de Estados Unidos que apuntaría a extender su perímetro de seguridad del Caribe hacia los Andes a partir del aprovechamiento del conflicto colombiano.

Otro elemento adicional a destacar es la exageración que el mismo Presidente hace de las amenazas que representa la situación colombiana para la región en el afán de conseguir apoyo internacional, en particular de los países vecinos y que lo lleva a efectuar declaraciones como que el conflicto tiene el potencial de “desestabilizar todo la región”<sup>14</sup>, “destruir la Amazonía” y “ser una amenaza mayor que el mismo conflicto de Irak”<sup>15</sup>.

Esta caracterización de la situación junto al aumento de la injerencia norteamericana en la dinámica del enfrentamiento, así como la invitación, que en ocasiones ha formulado Uribe a la intervención de tropas extranjeras para hacerle frente a los grupos armados, son leídos como llamados a regionalizar el conflicto. De ahí que

<sup>13</sup> Ramírez Socorro, “El gobierno de Uribe y los países vecinos” en *Revista Análisis Político* Bogotá, N° 57, Mayo-Agosto, 2006, p.66

<sup>14</sup> “Necesitamos un gran apoyo de la comunidad internacional”, en *Clarín*, 08 de junio de 2003

<sup>15</sup> “Uribe pide en Colombia un despliegue como en Irak”, *op. cit.*

distintos sectores de los países vecinos hablen de la regionalización del conflicto colombiano, lo cual implica que Colombia convierta su problema interno en un conflicto internacional de baja intensidad, en el que se combina el apoyo militar con la presión a la incorporación de los vecinos por parte del gobierno norteamericano.

El rechazo a la política de seguridad del gobierno colombiano ha sido aún más fuerte ante la actitud del propio Presidente, quien ha reiterado y puesto en práctica la decisión de ir por los guerrilleros donde quieran que se encuentren y de ofrecer recompensas a quien dé información sobre ellos o proceda a retenerlos. En este sentido se han presentado incidentes confusos como la detención de Simón Trinidad en Ecuador en los primeros días de enero de 2004 y el cruce de la frontera ecuatoriana por parte de las fuerzas militares colombianas en persecución de grupos guerrilleros han generado tensiones entre los dos países, aún durante el gobierno de Lucio Gutiérrez en Ecuador, también aliado de Estados Unidos en la región.

Algo similar, pero de mayores proporciones aconteció con Venezuela con motivo de la detención de Rodrigo Granda, integrante importante de las

FARC, durante los primeros días del 2005<sup>16</sup>.

Frente a la dificultad regional de acordar una posición conjunta con Colombia, la iniciativa ha quedado en manos de Estados Unidos que, ante problemas compartidos por los países andinos, ha impuesto un manejo bilateral acorde con sus estrategias.

### *Diálogo de paz y desmovilización de los paramilitares.*

Con respecto a los grupos irregulares la estrategia del primer mandato de Uribe es la negociación con los paramilitares, la confrontación militar con las FARC a través del Plan Patriota y los acercamientos y “contactos exploratorios” para una negociación con el ELN.

Las presiones internacionales llevan a Uribe a negociar con los paramilitares pero en las condiciones pautadas por él. A la distancia parece completarse su slogan político original: “mano firme con la guerrilla, corazón grande con los paramilitares” con quienes ha

---

<sup>16</sup> Granda, fue capturado en un confuso operativo en Venezuela, causando gran tensión diplomática entre Bogotá y Caracas. En “*Tensión entre Colombia y Venezuela por la captura de un guerrillero de las FARC*”, en Clarín 13 de enero de 2005

mantenido, indagando en su historia personal, estrechos vínculos y sintonía ideológica.

Otra razón que lleva a Uribe a terminar con el paramilitarismo es el hecho de que el fortalecimiento de las fuerzas armadas y la consistente ayuda norteamericana, ha reducido la dependencia estratégica de los paramilitares para el control territorial.

Ante esa pérdida del valor contrainsurgente de las Autodefensas Unidas Colombianas (AUC), la relación costo-beneficio de la persistencia de los paramilitares va en claro detrimento de las instituciones estatales: el daño nacional e internacional a la imagen del Estado y a la oficialidad de las fuerzas armadas por sus relaciones con esos grupos es mayor que los beneficios actuales de su participación en la guerra contrainsurgente<sup>17</sup>.

El Programa de Desmovilización, Desarme y Reintegración que se refiere a la negociación con los paramilitares no formó parte del Plan Colombia inicial, por lo que no tenía recursos específicos para llevarlo adelante pero se integró como parte de la Política de Seguridad Democrática del gobierno Uribe.

La negociación con los grupos paramilitares se inició en diciembre de 2002. En el documento inicial de la Política de Seguridad dado a conocer en el mes anterior está incluida muy difusamente como un llamado a la desmovilización de los miembros de grupos ilegales, en especial de los jóvenes individual y voluntario.

El proceso de desmovilización pactado con las fuerzas paramilitares comenzó a tomar forma cuando las AUC, bajo la dirección ideológica de Carlos Castaño, aceptaron un cese a las hostilidades como requisito para una negociación con el gobierno.

Estas intenciones de paz fueron plasmadas en julio de 2003 en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, documento por medio del cual el gobierno representado por Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz, nueve representantes de las AUC, y miembros de la Iglesia Católica en carácter de facilitadores, acuerdan “dar inicio a una etapa de negociación”, teniendo “como propósito de este proceso el logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el

<sup>17</sup> Pizarro Leongomez, Eduardo: “Una luz al final del túnel. Balance estratégico del conflicto armado en Colombia” en *Revista Nueva Sociedad*, Fundación Foro Nueva Sociedad, Bs. As. N° 192, Julio-Agosto, 2004, p. 83

restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado”<sup>18</sup>.

El acuerdo prevé que el proceso de desmovilización debe culminar a más tardar para diciembre de 2005, mientras que el gobierno se compromete a adelantar las acciones necesarias para reincorporar a la vida civil a aquellos miembros de las AUC que opten por deponer sus armas para desactivar los factores de violencia que afectan a Colombia”<sup>19</sup>.

A pesar de las buenas intenciones declarativas expuestas en el documento, lo cierto es que se trata de un proceso extremadamente complejo por la naturaleza de sus actores como por las múltiples críticas recibidas desde el gobierno estadounidense, de las organizaciones de derechos humanos y de muchos sectores de la opinión pública colombiana. La razones de esta resistencia tienen que ver por un lado con el grado extremo de violencia desplegada por las AUC en su estrategia de asesinatos sistemáticos de la población civil para conseguir sus objetivos de expansión territorial; segundo porque en estos últimos veinte

años han tejido una densa red de complicidades con los organismos de seguridad nacionales (entiéndase el Ejército colombiano), tercero por su histórico vínculo con el narcotráfico, y cuarto por la forma agresiva en la que han filtrado los ámbitos gubernamentales a nivel local, regional e inclusive nacional<sup>20</sup>.

El proceso de negociación, que se condujo con el auspicio de la OEA implica cese el fuego, concentración territorial, desmovilización y disminución de penas incluida la posibilidad de eludir la extradición, como veremos más adelante.

### *El Plan Patriota*

El Plan Patriota se emprendió en las primeras semanas de mayo de 2004 y se dio por finalizado en diciembre de 2006. Se trató de una estrategia destinada a hacer frente militarmente a las FARC, obligándolas a desplazarse hacia la frontera sur del país. Ya estaban en marcha las negociaciones entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia y se planeaba una nueva

<sup>18</sup> República de Colombia - Alto Comisionado para la Paz - Documento del *Acuerdo de Santa Fe del Ralito para contribuir a la paz de Colombia*, julio, 2003.

Disponible en: [www.altocomisionadopalapaz.gov.co/acuerdos](http://www.altocomisionadopalapaz.gov.co/acuerdos)

<sup>19</sup>Ibidem.

<sup>20</sup> Gutiérrez Sanin, Francisco: *“Ilegalidad y sistema político en Colombia: la agenda de Uribe Vélez”* en *Revista Nueva Sociedad*, Fundación Foro Nueva Sociedad, Bs. As. N° 192, Julio-Agosto, 2004, pp. 65-69.

negociación con el ELN. El Gobierno de Uribe Vélez, reconoció que para definir el Plan se produjeron decenas de reuniones entre el Ejecutivo y la cúpula de las Fuerzas Militares con el Comando Sur y los Departamentos de Estado y Defensa de los Estados Unidos.

El Plan formó parte de la Política de Defensa y Seguridad Democrática ya que fue el instrumento efectivo para cumplir con el objetivo de consolidar el control estatal del territorio, planteado por el gobierno de Uribe. Para alcanzarlo, el Plan contempló una fuerza de alrededor de 15.000 hombres (incluido un número importante de asesores militares y contratistas norteamericanos) que integraban unidades móviles desplazadas en las selvas y poblados del sur del país, donde la debilidad del Estado era más que evidente; específicamente en los departamentos de Guaviare, Putumayo, Caquetá, Meta y Amazonas, todas ellas zonas bajo control de las guerrillas de las FARC y el ELN.

El objetivo, al parecer, era capturar o eliminar a miembros del Secretariado de las FARC, destruir la infraestructura logística de su retaguardia estratégica y debilitar de una manera crítica el núcleo militar más duro de las FARC.

Se trató de una propuesta política y militar que ha sido impuesta desde

Washington y Bogotá; y que fue aceptada desde Quito y Lima. Estados Unidos ha aprovechado la debilidad política, la cercanía a Washington y la dependencia presupuestaria de las fuerzas armadas de estos países de la ayuda que el gobierno de Bush canaliza a través de la llamada Iniciativa Regional Andina, inaugurada al inicio de su mandato.

En el Plan Patriota fueron involucradas las fuerzas armadas de Perú, y en mayor medida las de Ecuador, bajo la excusa de que nada podía evitar pensar en un posible desborde de las fronteras. Colombia convertiría a Ecuador en el “yunque” del martillo táctico que golpearía desde el sur colombiano a los grupos insurgentes. La producción de hechos de “desborde” de las fronteras convalidaría la tesis de “regionalización” del conflicto armado. Dada esta característica, la nueva propuesta militar colombiana tendrá diferencias, cada vez mayores con las posiciones de Brasil y Venezuela, inclinados a la no intervención.

Lo cierto es que el Plan Patriota se estancó a mediados de 2005. Debido a la falta de infraestructura, a la presencia paramilitar y a las dificultades planteadas por la densa selva tropical, hubo fallas estratégicas luego de algunos

éxitos tácticos en los primeros meses. Las FARC reaccionaron rápidamente replegando el cuerpo central de sus tropas, desmantelando los campamentos principales y dejando unidades pequeñas especializadas en carros bombas, minas antipersonales y francotiradores. Las mejores fuerzas móviles, incluida gran parte de su flotilla de helicópteros, tuvieron que perseguir a estos grupos por la selva cayendo víctima de enfermedades tropicales. La moral se desplomó, al tiempo con la efectividad operacional<sup>21</sup>.

### *Los diálogos con el ELN*

Los acercamientos de Uribe con el ELN se dieron desde el comienzo de su primer mandato. Desde agosto a diciembre de 2002, la Comandancia Central mantuvo algunos “contactos exploratorios” en La Habana, con el alto comisionado del gobierno que luego el ELN suspendió porque el gobierno planteó el diálogo con los paramilitares y no querían que ambos procesos aparecieran en paralelo; también porque el ELN quería observar primero cómo se desenvolvía el ejecutivo, y éste

<sup>21</sup> “Mayores retos para Uribe en Colombia”, Crisis Group, Boletín Informativo sobre América Latina N°11, Octubre, 2006, p.4

realizó un llamamiento a la guerra, desarrollando iniciativas contra la insurgencia. Además según la versión del ELN el gobierno impuso tantas condiciones que no pudieron llegar a un acuerdo<sup>22</sup>.

A días de arrancar el Plan Patriota en las primeras semanas de mayo como ofensiva dirigida directamente a “decapitar” a las FARC, el gobierno toma la iniciativa de una nueva negociación con el ELN en Guadalajara, en el contexto de la Cumbre eurolatinoamericana, en mayo de 2004. Un proceso de este tipo tendría más amigos en el exterior y sería mucho más fácil de vender internacionalmente que la negociación con los paramilitares, aunque la opinión pública quedara confundida. En Guadalajara, se acordó la facilitación del gobierno del presidente Vicente Fox en el diálogo entre el ELN y el gobierno colombiano. La facilitación mejicana se dio entre junio de 2004 y abril de 2005.

El gobierno colombiano pidió al ELN que aceptara un cese de hostilidades previo al inicio de los diálogos, condición que no fue aceptada por la guerrilla. El ELN dio por finalizada la facilitación

<sup>22</sup> Luis Nieto Pereira: *Entrevista a Pacho Galán, comandante del ELN de Colombia: “No hay enemigo malo o bueno para hablar o pelear”*, 15 de junio de 2006. Pueblos. Revista de información y debate. En <http://www.revistapueblos>

mejicana al descalificar el papel de Méjico por su voto contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. No obstante la guerrilla destacó el papel facilitador que podría jugar el Grupo de Países Amigos (España, Francia, Suiza, Noruega y Cuba).

Posteriormente, en medio del escándalo de la “parapolítica” el ELN y el Gobierno del presidente Álvaro Uribe celebraron entre fines de 2005 y 2007 en La Habana, varias rondas de diálogo que terminaron en fracaso.

Los acercamientos entraron en un punto muerto debido a que el gobierno exigía un cese unilateral de hostilidades y la puesta en libertad de todos los secuestrados en poder del ELN.

Las partes tienen expectativas radicalmente diferentes sobre los resultados esperados de la negociación. El gobierno tiene como punto de referencia las negociaciones realizadas con los grupos paramilitares. La estrategia general de negociación del gobierno corresponde al modelo que puso en práctica en Santa Fe de Ralito con las AUC y su marco legal es la Ley de Justicia y Paz. Desde la perspectiva del gobierno colombiano, en Colombia no existe un conflicto armado sino la amenaza de unos grupos terroristas a un Estado democrático.

Ha expresado en que no se ofrecerán amnistías ni indultos y en que se respetarán los principios de verdad,, justicia y reparación. Además ha repetido que los miembros de estos grupos que hubieran cometido delitos atroces no podrán participar en política.

Por otra parte, el ELN se considera a sí mismo un actor político dentro del conflicto armado. Su posición actual es la de que se acuerde primero una agenda de negociación, unos procedimientos y luego sí se pase a discutir la posibilidad de un cese de hostilidades que esperaría, como puede suponerse, que fuera bilateral y verificable. El ELN tiene como punto de referencia la negociación de la administración Pastrana con las FARC, aunque entenderían que su principal elemento, la “zona de despeje” sería inviable políticamente. Su insistencia en la definición de la agenda, encaja en el modelo seguido por las FARC.

Es fácil suponer que el propósito del ELN no es acogerse a un proceso de paz que le dé el mismo tratamiento que han recibido los grupos paramilitares. No parece creíble que la meta de este grupo sea someterse a la Ley de Justicia y Paz y es fácil suponer que buscarían un marco legal diferente. El gobierno busca meter en el mismo saco de los

paramilitares al ELN o, eventualmente cambiar los términos de la ley para beneficiar por igual a paramilitares y guerrilleros. Para el ELN los términos de la Ley de Justicia y el modelo de negociación que le ofrece el gobierno no son aceptables<sup>23</sup>.

### *El segundo mandato de Uribe (2006-2010)*

Cuando América Latina parecía dar un giro hacia la centro-izquierda, Colombia aprovechaba la elección del 28 de mayo de 2006 para profundizar el giro en el sentido opuesto mediante la reelección del Presidente Uribe con más del 62% de los votos, Su promesa más osada para la reelección fue la de no renunciar a la “mano dura” con la guerrilla, sino más bien todo lo contrario, así aseguró su triunfo.

Las acusaciones de connivencia de él y de su familia con los paramilitares y el narcotráfico no fueron suficientes para desacreditarlo. Tampoco el hecho de que la campaña de reelección estuviera signada por la hostilidad guerrillera<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> Camilo Galán: “*Qué detiene al ELN*”, 4 de septiembre del 2007. En <http://blog.colombiahoy.or>

<sup>24</sup> López Ocon, Mónica, “*Ganó la reelección. ¿Y ahora que?*”, en *Revista Noticias* N°1536, Buenos Aires, Editorial Perfil. 03/06/2006

Al comienzo del segundo período el gobierno del presidente Álvaro Uribe contaba con una Fuerza Pública fortalecida, pero que no había logrado ni el monopolio del control territorial, ni derrotar a las FARC; La opción elegida fue la de continuar una campaña militar hasta infringir a las FARC una derrota contundente y forzarlas a una desmovilización incondicional.

Pese al repliegue estratégico de las FARC, este grupo mantenía una importante capacidad de destabilización y de acción en muchas zonas del país. Por su parte, las fuerzas armadas ya estaban llegando al tope de sus posibilidades operacionales y difícilmente podrían aumentar su presencia en otras zonas del territorio nacional o incrementar en forma sustancial la cantidad y la duración de las operaciones.

En su segundo mandato Uribe continuó su alianza con Estados Unidos con quien se había establecido una relación de dependencia en cuanto a la financiación de la política de Seguridad Democrática. Esta relación privilegiada con Estados Unidos debía ser compatibilizada con un contexto regional caracterizado por un conjunto de gobiernos sudamericanos con pretensiones de autonomía, por lo menos relativa, frente a las políticas de

Estados Unidos y promoviendo procesos de integración subregional como la Comunidad Sudamericana de Naciones que luego se denominaría UNASUR, cosa que no ocurrió.

Este segundo mandato se va a caracterizar por rotundos éxitos con la guerrilla, especialmente con las FARC, y, al mismo tiempo, por la profundización de los conflictos con los países vecinos que llevaron a tensar al máximo las relaciones bilaterales con Ecuador y Venezuela, y preocuparon seriamente al conjunto de la región.

### *El Plan Victoria*

En diciembre de 2006 Álvaro Uribe anuncia el llamado “Plan Victoria”, prolongación del Plan Patriota, cuyo objetivo es capturar a los líderes de las FARC. El presidente daba a entender que al menos que la cúpula de las FARC fuese capturada, seguiría siendo imposible derrotar a los insurgentes. Esta fase contaría con nueve aviones Super Tucanos adquiridos a Brasil. La nueva “fase de consolidación” que se iniciaría en enero de 2007 afectaría directamente a Ecuador.

La estrategia fue mencionada por primera vez por el presidente de la

Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Luis Macas, quien citó a fuentes anónimas en las fuerzas armadas ecuatorianas. “Esta nueva fase del Plan Colombia busca consolidar la presencia del ejército colombiano en las zonas controladas por la guerrilla, a través de una ofensiva militar que contará con el apoyo directo de la base aérea (ecuatoriana) de Manta y utilizará el territorio de los vecinos países, particularmente de Ecuador.”<sup>25</sup>, dijo Macas en esa ocasión.

La idea implícita en el Plan Victoria era presionar a Ecuador “para consolidar la presencia militar en la frontera con Colombia, no para proteger su propia soberanía territorial, sino para una mayor participación del país en el conflicto colombiano”. Así esta fase de consolidación implicaba reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la base ecuatoriana de Manta cedida a Washington para la lucha contra el narcotráfico como centro logístico de las operaciones aéreas de apoyo al Plan Colombia.

Rafael Correa, que asumía como presidente de Ecuador en enero de 2007, anunció que no renovarían el

<sup>25</sup> Kintto Lucas: “Ecuador-Colombia: de la crisis diplomática con el Plan Victoria”, Quito, 27 de diciembre de 2006. En <http://translate.gouusercontent.com>

convenio de la base de Manta cuando expirase en diciembre de 2009. Así el comienzo del Plan Patriota y la reanudación unilateral en diciembre de 2006 de la fumigación aérea de cultivos de coca en Colombia, cerca de la frontera con Ecuador, no serían iniciativas aisladas. Las relaciones de Uribe con el nuevo gobierno de Rafael Correa comenzaron mal y esto sería sólo el preanuncio de la grave crisis diplomática que se desataría después por el ataque colombiano al campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano.

### *La Ley de Justicia y Paz: marco legal para la desmovilización paramilitar*

Uno de los éxitos del primer gobierno de Uribe fue la desmovilización de las AUC y la entrega de más de 30.000 de sus combatientes. En su segundo mandato debía terminar de ubicar esta desmovilización dentro de un marco legal, investigar y juzgar a los paramilitares y completar el proceso de reinserción de los desmovilizados, al tiempo que se impida su reincorporación al conflicto armado, se entregue la reparación a sus víctimas y se inicie la reconciliación.

El segundo período presidencial de Uribe se inicia con el dictado del marco legal para investigar y juzgar a los paramilitares, acción que tuvo como efecto indeseado la disminución de capital político a partir del escándalo de la “parapolítica” que se derivó del proceso.

La Ley 975 conocida como Ley de Justicia y Paz (LJP) aprobada en julio de 2005, pretendió dar piso jurídico al proceso de paz llevado adelante por el gobierno colombiano y las AUC. La misma fue presentada como Ley de “alternatividad penal” en el 2003, buscando atraer a los paramilitares al proceso de paz, pues estos grupos irregulares no habrían tolerado las penas previstas por el Código Penal colombiano (la máxima condena en Colombia es de 60 años de cárcel).

Desde entonces hasta el día de hoy ha sido objeto de fuertes y encendidas controversias por parte de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, de diversos sectores políticos colombianos e incluso de Washington, que finalmente terminó respaldándola. En general se señala que esta ley ofrece generosos beneficios judiciales, como la fuerte reducción de penas de privación de la libertad y amplias posibilidades de libertad

condicional a quienes hayan cometido graves crímenes, sin una contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad y la reparación.

Entre los puntos más importantes y polémicos de la ley se pueden mencionar los siguientes:

a) La ley otorga estatus político para las AUC, medida que protegería a los paramilitares indirectamente de ser extraditados por narcotráfico y que por otro lado les abriría las puertas para participar en política.

b) La Ley no estipula una forma clara en el logro de acuerdos colectivos entre el gobierno y los grupos armados al margen de la ley para que estos últimos cesen las hostilidades. Es fundamental privilegiar los incentivos para la desmovilización colectiva de los grupos y de sus bloques, pues solo ello puede efectivamente permitir la superación del conflicto armado. La ley da el mismo tratamiento a la desmovilización individual que a la desmovilización colectiva basada en acuerdos firmes e integrales. Ello abre indebidamente las puertas a amplios beneficios judiciales individuales para ciertos victimarios sin las contraprestaciones adecuadas. (Artículos 1º, 2º, 10º y 11º)

c) Las penas oscilan entre 5 y 8 años para los autores de masacres, secuestros

y demás delitos cometidos durante la pertenencia al grupo armado ilegal, previa confesión -que como prevé la ley, puede ser una simple versión libre y espontánea- y colaboración con la justicia. Si se descubriere nuevos hechos producto de la investigación realizada a partir de la confesión o mala fe en la misma, la pena podría ampliarse solo en un 20%. (Artículo 29º)

d) Asimismo la Ley posibilita el cumplimiento de la pena en lugares diferentes a las cárceles e inclusive en el exterior. (Artículo 30º)

e) También prevé la reducción de las penas en un 10% para todos los presos que estén cumpliendo una sentencia firme al momento de la entrada en vigencia de la normativa, a excepción de los que hayan sido condenados por delitos sexuales, de lesa humanidad y narcotráfico. (Artículo 70º)<sup>26</sup>.

A partir de la puesta en vigencia de la ley a los paramilitares les ha preocupado básicamente tres temas: la extradición que depende de la voluntad del presidente, la reparación y el tiempo en prisión. Pocos paramilitares tienen intenciones reales de entregar la totalidad de sus bienes al Estado, y

<sup>26</sup> República de Colombia - Alto Comisionado para la Paz - Ley 975/2005 Ley de Justicia y Paz. Disponible en: [www.altocomisionadopalapaz.gov.co](http://www.altocomisionadopalapaz.gov.co)

ninguno quiere pasar hasta ocho años en una cárcel de máxima seguridad<sup>27</sup>.

Por lo que refiere al enfoque jurídico se ha señalado a la LJP, tanto en sus elementos sustantivos como en sus aspectos procesales, como un instrumento normativo muy laxo hecho por y para los paramilitares, lo cual concluirá probablemente en una total impunidad.

Otro reto enorme es la reinserción de los combatientes desmovilizados, muchos de los cuales ya han presentados quejas al respecto. Específicamente por la ausencia de oportunidades de trabajo y de opciones de vivienda, de capacitación laboral y el escaso apoyo para los hijos y esposas de los desmovilizados<sup>28</sup>.

### *El “paragate”*

A comienzos de 2007 el presidente Álvaro Uribe y su gobierno debió afrontar un complicado escenario nacional desdoblado en dos niveles: uno tiene que ver con el escándalo desatado por los nexos entre miembros de las AUC y representantes del oficialismo, convirtiéndose en la mayor crisis política

en el país desde que, en 1994, estuvo a punto de hacer caer al ex presidente Ernesto Samper por haber financiado su campaña electoral con dinero aportado por representantes del Cartel de Cali; y el otro la ausencia de un esquema de negociación racional y definitiva con las FARC que involucre la liberación de los secuestrados en manos de la organización guerrillera.

El proceso de desmovilización de los paramilitares tuvo consecuencias lógicas que quizás Uribe pensaba que podría ocultar. Las declaraciones de los pocos líderes paramilitares encausados sacaron a la luz algo que era un secreto a voces: la relación entre muchos políticos vinculados al presidente y los paramilitares.

Desde noviembre de 2006 la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de nueve legisladores, todos representantes de departamentos del norte de Colombia y todos oficialistas. Casi una veintena más fueron señalados por la sociedad civil, pero la cifra se podría multiplicar por tres. La polémica se agudizó aún más cuando fueron detenidos el legislador Álvaro Araujo Castro, sospechoso de secuestro extorsivo y asociación para delinquir con grupos paramilitares, y su padre Álvaro Araujo Noguera, investigado por su

<sup>27</sup> “Mayores retos para Uribe ...” op. cit. p. 7

<sup>28</sup> Ibidem. p.9

relación con el secuestro de un rival político de su hijo, cometido por las AUC por uno de sus jefes “Jorge 40”, Rodrigo Tovar, hacía cinco años, ambos familiares directos de la entonces canciller y joven estrella del Gobierno, María Consuelo Araujo, quien se vio prácticamente forzada a renunciar en el mes de febrero de 2007, cobrándose, de esta manera, la primera víctima dentro del gabinete del Presidente Uribe.

Además fue preso el ex zar de inteligencia de Uribe durante tres años, Jorge Noguera, ex jefe de la DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y antes coordinador de su primera campaña presidencial en el septentrional departamento del Magdalena, acusado de haber puesto el DAS al servicio de las AUC.

Por otra parte desde su cárcel de Itagiú, Salvatore Mancuso, uno de los ex jefes de las AUC, advirtió mediante un comunicado preocupante del rearme de, al menos, 5000 paramilitares. Poco caso se le hizo, pero lo cierto es que las autoridades de Colombia detuvieron a 900 *paras* por reincidir en sus delitos. Luego otro histórico de las Autodefensas, Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido como “Macaco”, también advirtió de que existen más de 300 mandos medios “respecto de los

cuales no se tiene rastro” y menos aún control alguno. No se olvidó de recordar que otros 40 líderes nacionales, es decir, casi el 50% del total, no se han sometido a la justicia y no se esperan que lo hagan. Y además añadió Macaco, “deambula por el país una población ociosa de más de 20.000 desmovilizados, de los cuales muchos entrarán a formar parte de los “Águilas Negras” como denominó Mancuso a estos grupos de *paras* rearmados.

En medio de este escándalo, Uribe, obligado a dar un golpe de efecto, nombró a Fernando Araújo nuevo Ministro de Exteriores que estuvo seis años secuestrado por la guerrilla y que fue liberado en un exitoso operativo de rescate.

En mayo de 2008 todos estos capos paramilitares, y otros más que en sus declaraciones revelaron sus contactos con la política, fueron extraditados sorpresivamente por orden presidencial a Estados Unidos donde sólo serán juzgados por sus delitos de narcotráfico.

*El apoyo y las dos promesas de Bush a Uribe en su gira por Latinoamérica.*

En el marco de una gira latinoamericana a mediados de marzo de 2007, el Presidente Bush llega a Colombia después de visitar Brasil y Uruguay, significando un gran espaldarazo para Uribe que enfrenta la peor crisis política en la historia reciente de su país.

A pesar de la polémica y de la preocupación manifestada por los demócratas sobre el escándalo de la “parapolítica”, Bush renovó su apoyo al mandatario colombiano, con su visita y sus declaraciones. Este respaldo también tenía una importancia estratégica para la Casa Blanca, ya que Uribe era el único aliado de relevancia que tenía en la región, donde el avance de la influencia del Presidente venezolano Hugo Chávez causa preocupación en Washington <sup>29</sup>.

El undécimo encuentro sostenido por ambos mandatarios se convirtió en el marco propicio para el tratamiento de cinco temas de destacada importancia para ambos gobiernos: 1) la ratificación del Tratado de Libre Comercio, acuerdo que fuera firmado en noviembre de 2006; 2) la continuidad del apoyo norteamericano en la forma del llamado Plan Colombia II; 3) la posibilidad de que Colombia se sume al acuerdo con Brasil para la producción de biocombustibles;

<sup>29</sup> “Para Uribe, un momento delicado”, en *La Nación*, 12 de marzo de 2007

4).la situación de los tres estadounidenses secuestrados por las FARC desde el 2003 y su posible liberación y 5) el proceso con los “paras” y el escándalo de la “parapolítica”.

El presidente de Estados Unidos, George Bush, aseguró durante su visita a Bogotá que trabajaría “intensamente para lograr la aprobación del Congreso del tratado de libre comercio entre ambos países (TLC) y la continuación de la ayuda estadounidense como una segunda fase del Plan Colombia<sup>30</sup>.

Desde que el gobierno colombiano inició el proceso con las AUC, Washington, con algunas reservas, lo había apoyado. Sin embargo en el medio de una fase clave del desmonte de las autodefensas, la

<sup>30</sup> El Plan Colombia que estaba contemplado originalmente para seis años, desde que se formuló en 1999 hasta el 2005, se prolongó por un año más casi de manera inercial, hasta que a principios de 2007 el gobierno de Álvaro Uribe en su segundo mandato presenta la Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y del Desarrollo Social (EFDDS) 2007-2013, la cual se asume como fase II del Plan Colombia. Esta estrategia está fundamentalmente dirigida a conseguir el apoyo de la comunidad internacional para la consolidación de los que se consideran son logros del Plan Colombia y la Política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe. La ampliación y profundización que significa la EFDDS frente al Plan Colombia implica también una reinterpretación del esquema original; algunos objetivos iniciales son reelaborados; se incluyen temas que no estaban contemplados originalmente tales como la desmovilización, el desarme y la reinserción y se redefine el conflicto como amenaza terrorista, además, se suprimen otros temas que antes parecían ser centrales en el Plan Colombia, como la negociación con las guerrillas.

gran preocupación del gobierno colombiano es como mantener en la vida civil a más de 30 mil hombres que depusieron las armas, la falta de recursos para financiar proyectos productivos y la completa reinserción de los ex-combatientes. Por otro lado, las investigaciones en contra de congresistas y funcionarios cercanos al gobierno de Uribe, por presuntos nexos con paramilitares, sí preocupa a un amplio sector de los demócratas, hoy mayoría en el Congreso norteamericano, que pone en entredicho la ayuda militar a Colombia y la ratificación del TLC.

### *Rescate por la fuerza versus acuerdo humanitario*

Desde su llegada al poder en 2002 Uribe rechaza categóricamente el llamado “intercambio humanitario”. Ha sostenido que: “su gobierno no caerá en la trampa de la guerrilla que trafica con el dolor de los familiares de los secuestrados en busca de una zona de despeje para recuperar su capacidad terrorista. (...) Mientras persistan estas acciones terroristas hoy el único camino que queda es el rescate militar y policial de los secuestrados. No vamos a permitir que nuestra buena voluntad para el

acuerdo humanitario sea objeto de la farsa de las FARC”<sup>31</sup>.

Durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe, no hubo contactos serios entre las FARC y la administración para hablar de paz. Posteriormente, continuaron algunas esporádicas gestiones diplomáticas con la organización guerrillera en pro de la realización de un “acuerdo humanitario” conocido también como intercambio de prisioneros o canje.

Las dos partes no han conseguido ponerse de acuerdo. Las FARC pedían que se liberen todos sus guerrilleros presos, incluidos “Simón Trinidad” y “Sonia” (quienes fueron extraditados a Estados Unidos acusados de tráfico de drogas y terrorismo) y, después de ser reintegrados a la organización, las FARC liberarían un pequeño grupo de 44 secuestrados, los denominados “canjeables”. Para que dicho cambio se hiciese realidad, las FARC pedían como requisito la desmilitarización de dos municipios: Pradera y Florida.

En este contexto, a comienzos de mayo de 2007, tras una llamada telefónica del flamante presidente francés Nicolás Sarkozy quien se mostró preocupado por la situación de la ex candidata

<sup>31</sup> “Uribe opta por la vía militar con las FARC”, en Clarín, 23 de octubre de 2006.

presidencial, la ciudadana colombiano-francesa, Ingrid Betancourt, Uribe anunciaba la liberación “unilateral” de 193 guerrilleros entre los cuales se encontraría Rodrigo Granda, uno de los máximos dirigentes de la organización. Al mismo tiempo, pedía a las FARC que respondieran a ese “gesto de buena voluntad” procediendo a la liberación de los rehenes

La medida buscaba convertirse en una estrategia facilitadora para un mayor acercamiento entre el Estado y las FARC a fin de lograr la liberación de Ingrid Betancourt y del resto de los secuestrados retenidos por los insurgentes<sup>32</sup>.

Según algunos medios Granda rechazó ser parte de la política de excarcelación masiva ordenada por Uribe y dejó en claro, a través de su abogado, que no asumiría ninguna responsabilidad sin el aval del secretariado de las FARC.

Por su parte las FARC, por medio de varios comunicados calificaron la iniciativa oficial como una “cortina de humo” que buscó tapar el escándalo de la “parapolítica”, en referencia a los vínculos de los paramilitares con los legisladores oficialistas; y volvieron a plantear la posibilidad de negociación

<sup>32</sup> “Uribe presiona a las FARC y pone en libertad al canciller de la guerrilla”, en Clarín, 5 de junio de 2007.

solo mediante la desmilitarización de las localidades de Florida y Pradera, ubicadas a unos 50 kilómetros de Cali, propuesta que Uribe no estuvo dispuesto a aceptar.

También expresaron que “El demagógico anuncio de liberar unilateralmente presos nada tiene que ver con un canje que será el resultado de acuerdos entre el Estado y la insurgencia revolucionaria, donde se definan criterios, tiempos, nombres y mecanismos (...) La concreción de un canje exige de parte del gobierno el abandono del doble juego oficial que prevalece, ya que mientras se distrae con la propaganda de la liberación de los presos, las tropas oficiales continúan intentando rescates a sangre y fuego sin importarles para nada la vida y la integridad de los prisioneros”<sup>33</sup>.

El 18 de junio de 2007 el gesto de buena voluntad de Uribe de liberar 193 guerrilleros se vio prácticamente eclipsado con el asesinato de 11 diputados secuestrados por las FARC desde abril de 2002<sup>34</sup>. Mientras ésta organización guerrillera insiste en que se trató de un confuso episodio de rescate militar de las víctimas en cautiverio, el

<sup>33</sup> “El Engaño”, comunicado de las FARC, 5 de junio de 2007. Disponible en: [www.farcep.org](http://www.farcep.org)

<sup>34</sup> “Conmoción en Colombia: murieron 11 diputados en poder de las FARC”, en Clarín, 29 de junio de 2007.

gobierno alega desconocer el lugar donde permanecían los secuestrados e incriminan a las FARC por ocultar el crimen calificado de lesa humanidad<sup>35</sup>.

### *La mediación de Hugo Chávez*

Frente a este trágico episodio, el 5 de agosto de 2007 la senadora opositora colombiana Piedad Córdoba, autorizada por el gobierno de su país para facilitar un canje humanitario con las FARC de 45 rehenes por 500 guerrilleros presos, consiguió la aceptación por parte de Hugo Chávez de la mediación entre las FARC y el gobierno colombiano.

El presidente Álvaro Uribe dio el 17 de del mismo mes el consentimiento a Chávez para participar en el proceso. De resultar exitosa esta mediación, ésta podría ser el principio de un proceso de paz más amplio. Importantes sectores colombianos, incluido el ex presidente Belisario Betancour apuntaron en esta dirección<sup>36</sup>. Un alcance mayor que el intercambio humanitario sí incomodaría al gobierno de Uribe. Entrevistado en Nueva York, durante el transcurso de la reunión de la Asamblea General de la

ONU ante las preguntas con respecto a las expectativas de un proceso de paz Uribe guarda silencio, pero insiste en su política de línea dura con la guerrilla. “Para nosotros la vía militar es tan válida como la vía de negociación”, explicó. “No permitiremos que nada rompa nuestro objetivo de una política firme con la que decimos *no más terrorismo*” añadió Uribe<sup>37</sup>.

Si bien Chávez contaba con el beneplácito de los familiares de las víctimas, el apoyo de varios países incluidos Brasil y Estados Unidos y de los altos mandos guerrilleros<sup>38</sup>, el mayor obstáculo para el acuerdo parecía ser la rotunda negativa de Uribe de acceder a la desmilitarización de los dos municipios del Valle de Cauca, en el sudoeste del país durante 45 días como condición previa para sentarse a negociar.

Otro de los difíciles puntos se refería a la liberación de los tres contratistas norteamericanos Marc Gonsalves, Thomas Howe y Keith Stanssen que según la guerrilla sólo produciría cuando Estados Unidos devuelva a Colombia a Ricardo Palmera, alias “Simón Trinidad”

<sup>35</sup> “Mueren 11 políticos rehenes de las FARC”, en *La Nación*, 29 de junio de 2007.

<sup>36</sup> Roberto Giusti: *Entrevista a Belisario Betancour. Ex presidente de Venezuela*. Diario *El Universal*, Caracas, 1 de octubre de 2007.

<sup>37</sup> <http://www.lukor.com/not-mun/americ/0709/27034504.htm>

<sup>38</sup> “Las FARC aceptan la mediación de Hugo Chávez para concretar el intercambio de prisioneros”, *El Eco de Tandil*, 27 de agosto de 2007.

y a Anayibe Rojas, apodada “Sonia”, ambos extraditados en 2005 a Estados Unidos, acusados por narcotráfico, juzgados y condenados por una corte federal norteamericana.

En el marco de su gestión como mediador con las FARC para la liberación de prisioneros, y en avance hacia el proceso de acuerdo humanitario, también Chávez actuó de facilitador con voceros de la guerrilla del ELN. para restablecer los contactos entre el gobierno colombiano y el ELN, suspendido en La Habana, con el fin de conseguir un acuerdo de paz de cese el fuego y hostilidades.

En noviembre de 2007, tres meses después de haber aprobado la intervención del presidente Chávez, Uribe decide poner fin a la mediación del presidente Chávez, para retornar a la “ofensiva militar”<sup>39</sup>.

Desde la crisis suscitada por la finalización de la labor mediadora del presidente Chávez, el ELN no volvió a tener contacto alguno con el gobierno ya que en primer lugar el ELN condiciona los diálogos a que continúe Chávez en la mediación y en segundo lugar porque el ELN está haciendo depender un poco sus decisiones de lo que resuelvan las FARC.

<sup>39</sup> “Uribe puso fin a la mediación de Chávez”, *La Nación*, 23 de noviembre de 2007.

Durante el gobierno de Uribe, las FARC y el ELN estuvieron enfrentadas por control territorial, sin embargo, en noviembre de 2009, firmaron una nota conjunta en la que anuncian que deciden parar la absurda confrontación de las dos fuerzas en algunas regiones del país y encaminarse a la unidad y fraternidad revolucionaria para enfrentar con firmeza y beligerancia al gobierno de Uribe y el imperialismo norteamericano<sup>40</sup>.

En un nuevo y sorpresivo giro, acorde a su política pendular hacia la guerrilla e intentando retomar las riendas de una posible negociación, Uribe propone, conjuntamente con la Iglesia Católica colombiana y la Comisión Nacional de Conciliación, la creación de una “zona de encuentro” como alternativa a la “zona de despeje” solicitada oportunamente por las FARC. Se trataría de un área de aproximadamente 150 kilómetros en zona rural, sin puestos

<sup>40</sup> Al mismo tiempo afirman su esperanza en que “la solución política podrá detener la guerra, hallar la paz y hacer posible la construcción de una Colombia Nueva que nos incluya en la definición de su destino y que no será ajena a las nuevas dinámicas que hoy se viven en Nuestra América”. Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo y Comando Central del Ejército de Liberación Nacional: “A la militancia de las FARC EP y del ELN”, Montañas de Colombia, noviembre de 2009

militares o policías y preferiblemente con poca población civil<sup>41</sup>.

La respuesta a esta iniciativa fue un rotundo “no” por parte de las FARC, que además decidieron llevar a cabo una entrega bilateral de rehenes entre los que se encontrarían Clara Rojas (compañera de fórmula de Ingrid Betancourt, su pequeño hijo, Emmanuel y la ex congresista Consuelo González de Perdomo, como un acto de desagravio al presidente Chávez desautorizado en la mediación.

Tras el anuncio, el presidente venezolano se ocupó de los aspectos logísticos-estratégicos del operativo y rápidamente convocó una comisión de garantes internacionales encabezada por el ex presidente argentino Néstor Kirchner, delegados de Francia, Suiza, Brasil, Bolivia, Cuba y Ecuador.

Pero la “Operación Transparencia”, o también llamada “Operación Emmanuel” resultó ser un verdadero fracaso. Por un lado porque el presidente Uribe, quien se había mantenido hasta el momento en silencio frente al operativo, reveló sorpresivamente que Emmanuel, el hijo que Clara Rojas tuvo en cautiverio, se encontraba bajo protección del gobierno colombiano desde el 2005. Por su lado

<sup>41</sup> “Uribe allana el canje con las FARC”, *La Nación*, 8 de diciembre de 2007.

las FARC alegaron que los continuos operativos militares del Ejército colombiano en cercanías de la zona de rescate no permitían alcanzar las condiciones de seguridad necesarias para proceder a la entrega de rehenes<sup>42</sup>.

Más tarde, a mediados de enero de 2008, en un intento por mejorar su imagen pública, las FARC deciden finalmente llevar a cabo la liberación prometida que también sirvió para recuperar protagonismo político de Chávez tanto en la región como en el interior de su país.

La escalada entre ambos países recrudesció aún más cuando el mandatario venezolano exhortó al gobierno colombiano y a la comunidad internacional “a reconocer a las FARC y al ELN como grupos insurgentes en Colombia y no como grupos terroristas”<sup>43</sup>.

Uribe no sólo reafirmó el carácter de terroristas de la guerrilla colombiana y de los paramilitares, sino que también inició una gira diplomática por Europa para fortalecer su vínculo con los países europeos implicados en el conflicto colombiano (Francia, España y Suiza) y

<sup>42</sup> “Sería Emanuel el niño bajo la protección oficial de Colombia”, *La Nación*, 5 de enero de 2008

<sup>43</sup> “Las FARC no son terroristas”, *La Nación*, 12 de enero de 2008

en apoyo a su conocida propuesta de una “zona de encuentro”.

En realidad la figura de “fuerza beligerante”, bastante usada en el pasado, tiene por finalidad conferir a una de las Partes de un conflicto armado un estatus especial por medio del cual, el Estado que lo reconoce como tal, establece relaciones semi-diplomáticas, diplomáticas, políticas o económicas con la Parte reconocida para emprender negociaciones que conlleven a la paz, asumiendo la neutralidad en el conflicto<sup>44</sup>.

Por su parte y a espaldas de los esfuerzos demostrados por el presidente colombiano, las FARC deciden liberar a otros tres rehenes, nuevamente, como un gesto de desagravio hacia el mandatario venezolano por sus gestiones en busca de un canje humanitario. El Ministro del Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín junto a la senadora colombiana Piedad Córdoba fueron los encargados de recibir en una misión humanitaria, acompañados por los representantes de la Cruz Roja Internacional, a los ex legisladores Jorge Eduardo Gechern, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán y Gloria Polanco en una

zona selvática del departamento del Guaviare.

### *El ataque al campamento de Raúl Reyes y los debates en la OEA y el Grupo de Río*

Las negociaciones encabezadas por el mismo presidente venezolano y particularmente por su homólogo francés para lograr la liberación de la ex candidata a presidente, Ingrid Betancourt, quedaron trucas frente a la operación militar desatada por el Ejército colombiano el día 1 de marzo de 2008, en territorio ecuatoriano, frente al departamento sureño del Putumayo. El operativo militar representó un importante golpe a las FARC, ya que entre los 17 guerrilleros muertos se encontraba Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, quien hasta el momento desempeñaba un importantísimo rol como vocero y negociador del grupo insurgente.

El Gobierno colombiano justificó en un principio su incursión en territorio ecuatoriano en el “hot pursuit” o “persecución en caliente”, previsto en el derecho internacional del mar, por el que un Estado puede violar la soberanía de otro para detener a delincuentes hallados en flagrante delito.

<sup>44</sup> *Terroristas o beligerantes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia*, 29 de enero de 2010. En <http://está-en-nosotros.blogspot.com>

La indignante mentira de la persecución en caliente no pudo resistir el embate de la verdad. Se derrumbó ante el primer análisis dejando al desnudo la más infame violación al territorio, la soberanía y la dignidad de un país hermano.

Aunque no hay evidencias se sospecha que la operación contó con el apoyo norteamericano desde la base de Manta. En el comunicado divulgado por la Agencia Bolivariana de noticias, fechado el 20 de marzo de 2008 en las montañas de Colombia, las FARC señalaron que a las 00.25 del 1 de marzo impactó un misil lanzado por estadounidenses desde la base aérea de Tres Esquinas (Caquetá Sur), instantes antes de la entrada de las tropas terrestres.

Iván Márquez, integrante del Secretariado de las FARC, quien firmó el documento, sostuvo que el Ejército colombiano actuó “sobre seguro, con el consentimiento de su amo, con los satélites y la tecnología militar de punta proporcionada por el Gobierno de los Estados Unidos”<sup>45</sup>.

Según el líder guerrillero, las tropas colombianas entraron cuando el campamento dormía y durante la toma

“varios de los heridos” fueron rematados con tiros de gracia.

Al enterarse Hugo Chávez del ataque de Colombia en territorio ecuatoriano, advirtió que sería “causa de guerra” una eventual incursión militar de ese país en Venezuela en busca de presuntos miembros de las FARC, como la ocurrida en Ecuador.

El 2 de marzo Chávez ordenó el “cierre” de la embajada de Venezuela en Colombia tras acusar a Uribe de ser “criminal, paramilitar, narcotraficante y lacayo del imperio”.

También lo acusó de mentir sobre lo que consideró el “asesinato cobarde” de Reyes a quien rindió un minuto de silencio y de estar detrás de lo que “puede ser el comienzo de una guerra en Sudamérica”.

El 3 de marzo y ante acusaciones de Colombia sobre supuestos vínculos del gobierno ecuatoriano con la guerrilla que se sumaron a la agresión territorial el gobierno de Rafael Correa romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Uribe.

La vuelta a la “opción militar” generó para el presidente Uribe un alto costo político internacional, al menos en la región. La ofensiva bélica desató una profunda tensión diplomática,

<sup>45</sup> “Ataque a campamento de Raúl Reyes hirió gravemente el acuerdo humanitario”. *El Tiempo de Colombia*, 1 de abril de 2008. En <http://www.Elcomercio.com>

especialmente con Ecuador por haber violado su soberanía territorial y con Venezuela después de acusar al presidente Chávez de vínculos con las FARC supuestamente revelados en la información existente en las computadoras halladas en el campamento de Raúl Reyes.

En lo que respecta al ámbito doméstico, y a pesar del aumento de la popularidad del presidente, esta ofensiva truncó cualquier posibilidad de entablar algún tipo de vínculo con la guerrilla a fin de alcanzar una salida política y negociada que permita la liberación de los restantes rehenes.

En respuesta a la ofensiva, tanto Venezuela como Ecuador movilizaron tropas a la frontera con Colombia y expulsaron a los embajadores colombianos de sus territorios por el conflicto desatado. Por su parte el gobierno francés, si bien reafirmó la denominación de las FARC como grupo terrorista condenó los hechos ocurridos y reconoció haber mantenido contactos con Raúl Reyes en el marco de la operación de facilitación<sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup> Según dijo el jefe guerrillero Iván Márquez, integrante del Secretariado de las FARC, la operación militar en Ecuador impidió un encuentro con una delegación francesa en la que se iba a explorar la liberación de Ingrid Betancourt. En *Ataque a campamento de Raúl Reyes hirió gravemente el acuerdo humanitario*, op. cit.

Contrariamente, Estados Unidos, que ha condenado y se ha rehusado sistemáticamente a entablar contactos con organizaciones guerrilleras, fue el único país en apoyar el operativo militar perpetrado por el Ejército colombiano.

Esta postura fue explicitada en la sesión del Consejo Permanente de la OEA realizada el 5 de marzo, convocada de urgencia ante la gravedad de la crisis que afectaba a la región.

El Consejo consideró que “en la madrugada del sábado 1 de mayo fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia incursionaron en territorio de Ecuador, en la Provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso del Gobierno de Ecuador para realizar un operativo en contra de miembros de un grupo irregular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se encontraban clandestinamente acampando en el sector fronterizo ecuatoriano” y que “el hecho constituye una violación de la soberanía y de la integridad territorial de Ecuador y de principios del derecho internacional” y que “este hecho ha producido una grave crisis entre estos dos países provocando la ruptura de relaciones entre ambos Estados y una grave tensión en la región”.

Finalmente, el Consejo Permanente de la OEA resolvió “Reafirmar el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal”, pero a pesar de los reclamos del Presidente Correa, se abstuvo de condenar explícitamente la acción de Colombia. Asimismo se constituyó una comisión encabezada por el Secretario General del organismo, José Miguel Insulza, e integrada por otros cuatro embajadores, que visite ambos países recorriendo los lugares que las partes le indiquen a fin de elevar un informe y proponer fórmulas de acercamiento. En tercer lugar se decidió convocar a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para el día 17 de marzo con el fin de examinar los hechos y formular recomendaciones<sup>47</sup>.

El 7 de marzo se produciría un encuentro de mandatarios latinoamericanos en motivo de la XX reunión cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo, República Dominicana, en donde el tema del encuentro, que era la situación energética de la región, dio rápidamente

paso a una escalada verbal entre los presidentes protagonistas del conflicto regional que duró al menos siete largas horas de permanentes acusaciones y agravios personales.

En esta reunión puede afirmarse que se resolvió el pico más grave de la tensión regional entre Colombia y Ecuador. Así el Grupo puso a prueba su valiosa tradición como mecanismo fundamental para la promoción y la búsqueda de la paz en la región.

En la Declaración tomaron nota con satisfacción de “las plenas disculpas que el Presidente Álvaro Uribe ofreció al gobierno el pueblo de Ecuador, por la violación del territorio y la soberanía de esta hermana nación, por parte de la fuerza pública de Colombia” y registraron también “el compromiso del presidente Álvaro Uribe en nombre de su país de que estos hechos no se repetirán en el futuro bajo ninguna circunstancia”.

Los mandatarios presentes también reiteraron su “firme compromiso de combatir las amenazas a la seguridad de todos sus Estados, provenientes de la acción de grupos irregulares o de organizaciones criminales, en particular

<sup>47</sup>Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Resolución 930 (1632/08), Washington, 5 de marzo de 2008. En <http://www.eluniverso.com>

de aquellas vinculadas a actividades de narcotráfico”<sup>48</sup>.

Sin embargo, cuando las diferencias parecían haberse diluido, la reunión de cancilleres preestablecida en el marco de la OEA, volvía a dejar al desnudo cierto sentimiento de desconfianza y recelo, especialmente entre Quito y Bogotá. Con posterioridad a la exposición del informe efectuado por la comisión evaluadora que visitó ambos países en cuestión, Ecuador insistía que nada diferente a una “condena” le servía, mientras que Colombia, acompañada por Estados Unidos, recrudecía su posición amenazando con un proyecto de resolución a través del cual se llamaba a los países a respetar sus compromisos en la lucha contra el terrorismo y en el derecho a la legítima defensa como lo contempla la Carta de la ONU.

Después de un largo debate el Secretario General, José Miguel Insulza, logró acercar posiciones y consensuar los términos de la declaración final, que acogió positivamente la Declaración del Grupo de Río y destacó su contribución a la distensión de la situación y acercamiento de las partes.

<sup>48</sup> Declaración de la XX Cumbre del Grupo de Río sobre los acontecimientos recientes entre Ecuador y Colombia. Santo Domingo, República Dominicana, 7 de Marzo de 2008. En <http://www.admundo.com>

Prácticamente la replicó y agregó poco más: “instruir al Secretario General para que ejerza sus buenos oficios para la implementación de un mecanismo de observación del cumplimiento de esta resolución y el restablecimiento de un clima de confianza entre las dos partes”<sup>49</sup>.

### *Inteligencia, infiltración y recompensa, la nueva estrategia contra las FARC*

Detrás de los golpes demolidores que recibió la guerrilla durante el segundo mandato de Uribe se encontraban el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos y el Comandante de las Fuerzas Militares Freddy Padilla de León.

Padilla apostó por derrotar a las FARC apoyándose en la modernización del ejército no sólo en el mejor armamento y el aumento del pie de fuerza sino también en las labores de inteligencia como manera de llegar a su cúpula<sup>50</sup>.

La infiltración como apuesta a largo plazo y respaldada por tecnología de punta dio una ventaja infinita al Estado.

<sup>49</sup> OEA: “Resolución de la igésimo quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores”, Washington, 18 de marzo de 2008. En <http://www.mre.gov.ve/Noticias>

<sup>50</sup> Rogelio Núñez: “Colombia: El fin del fin de las FARC”, 6 de Agosto de 2010. En <http://www.infolatam.com>

También fue decisivo integrar y coordinar la inteligencia de todas las Fuerzas Armadas consolidando así un cuerpo con información secreta. Con inteligencia las fuerzas armadas llegaron los golpes decisivos de 2007 y 2008.

Trabajando con informantes de la guerrilla en 2007 comenzaron a producirse golpes decisivos sobre la estructura de las FARC. Cayeron ese año tres pilares claves que ejercían un férreo control sobre sus territorios. Con el fin de Milton Sierra conocido como “1.1”, en el Valle; el “Negro Acacio”, en Vichada y “Martín Caballero”, en el área rural del Aceituno en la zona norte del país la guerrilla quedó muy tocada.

Al igual que en la Operación Fénix que acabó con el número dos de las FARC Raúl Reyes, en el asesinato de Iván Ríos el miembro más joven del Secretariado de las FARC, fue clave la participación de un infiltrado. Los militares autorizaron el regreso de un desertor del frente 47 de las FARC a fin de contactarse con un amigo suyo alias “Rojas”, a quien podría convencerse por una recompensa de traicionar a las FARC. El cuidadoso proceso de infiltración que duró cinco meses culminaría con la muerte de Iván Ríos.

El 7 de marzo de 2008, Rojas, escolta de Iván Ríos, se presentó en la sede del

Batallón Ayacucho en Manizales en compañía de su novia Angélica Ocampo, donde reveló que había cumplido su misión y que además había asesinado a la compañera de Ríos. Acto seguido entregó la mano derecha que le había cercenado al jefe guerrillero, los documentos de identificación y su fusil. Rojas cobró la recompensa de 5000 millones de pesos y fue presentado como héroe, permitiéndosele salir del país. Conocida la macabra historia se abrió un debate sobre la legalidad de entregar recompensa a un hombre que asesinó a su compañero de armas para obtenerla<sup>51</sup>.

A la muerte por un infarto cardíaco de Manuel Marulanda, también conocido como “Tirofijo”, el líder histórico y fundador de las FARC producida el 26 de marzo siguió el 18 de Mayo la entrega de Nelly Ávila Moreno, alias “Karina”, una de las guerrilleras más activas y quien comandaba el frente 47 de las FARC. Se presentó al Ejército colombiano en el sitio conocido como Jordania en el Departamento de Antioquía. Santos indicó que la guerrillera “estaba prácticamente muriéndose de hambre”. El ministro aclaró que los servicios de inteligencia del Estado siempre la tuvieron ubicada, aunque logró escapar

<sup>51</sup> “Así cayó Ríos”, 12 de marzo de 2008. En <http://www.cambio.com>

en varias ocasiones. Dos semanas antes el presidente colombiano, Álvaro Uribe le había enviado un mensaje garantizando su seguridad cuando se entregara<sup>52</sup>.

El siguiente golpe demoledor siguió en julio cuando se desarrolló la Operación Jaque una misión de inteligencia militar de rescate que acabó con la liberación de la emblemática Ingrid Betancourt. Esta operación sin precedentes por su naturaleza en Colombia, no sólo fue importante por la liberación de los secuestrados, sino también porque en ella primó la inteligencia militar y la infiltración, no registró pérdidas humanas, ni siquiera hubo disparos por lo que el Gobierno y el ejército colombiano recibieron la gratitud de los secuestrados, sus familiares y el pueblo colombiano, a la vez que el reconocimiento y el elogio unánime de la comunidad internacional.

La parte medular del operativo consistió en la infiltración del Secretariado de las FARC y a la cuadrilla que mantenía a los secuestrados en el Departamento de Guaviare en el sureste de Colombia. Según declaraciones del Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, la inteligencia de las fuerzas militares

logró convencer a miembros de las FARC de la necesidad de trasladar a los secuestrados al mismo sitio, para llevarlos ante el nuevo comandante de esa guerrilla, alias Alfonso Cano, ya que se iba a iniciar un proceso de intercambio humanitario. Los militares colombianos lograron convencer a César y Gafas que no usaran teléfono satelital para llamar a alguien del secretariado para confirmar si era verdad diciéndole que no lo usaran porque si lo usaban podían ser interceptados por el ejército. Las fuerzas militares crearon una ONG ficticia, adaptaron helicópteros Mil Mi-17 pintándolos de blanco y coordinaron el traslado de los secuestrados a un punto de la selva. El grupo de quince secuestrados, los miembros de la supuesta ONG y los comandantes guerrilleros “César” y “Gafas” subieron al helicóptero. Los secuestrados fueron esposados para no levantar sospechas entre los comandantes guerrilleros, minutos más tarde los guerrilleros fueron inmovilizados y vendados los ojos, y finalmente el comandante de la operación anunció a los secuestrados: “Somos del Ejército Nacional, están en libertad”..

Entre los secuestrados figuraban Ingrid Betancourt, los tres contratistas estadounidenses, siete miembros del Ejército Nacional de Colombia y 4

<sup>52</sup> “Karina”, una destacada comandante de las FARC, se entrega al Ejército colombiano.19 de Mayo de 2008. En <http://elmundo.es>

miembros de la Policía Nacional de Colombia, lo que arrojó un total de quince personas rescatadas en dicha operación.

### *El escándalo de los “falsos positivos”.*

El llamado escándalo de los falsos positivos alcanzó la luz pública a finales del 2008 e involucra a miembros del Ejército de Colombia con el asesinato de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del conflicto armado que vive el país. Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de combate.

Si bien ya se venían conociendo denuncias y especulaciones sobre estos hechos, fue hasta cuando se conoció en los últimos meses de 2008 sobre la aparición de los cadáveres de 19 jóvenes que habían desaparecido en el municipio de Soacha vecino a Bogotá. Desde entonces han aparecido otros casos en Antioquía, Boyacá, Huila, Valle y Sucre.

Por dicho escándalo han sido destituidos varios oficiales y suboficiales del ejército y el comandante de dicha rama de las Fuerzas Armadas, el General Mario Montoya renunció a su cargo y fue

nombrado por el presidente Embajador en República Dominicana.

Para octubre del 2009 la Fiscalía General de la Nación tenía bajo investigación 946 casos relacionados con posibles “falsos positivos” y la procuraduría 1043. Sin embargo a pesar del escándalo suscitado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios había sido liberados por vencimientos de términos.

Según Simone Bruno, periodista italiano radicado en Colombia, en estos años en Colombia se ha generado un patrón persistente de ejecuciones extrajudiciales y de impunidad que ha venido cambiando en el tiempo en su modalidad. Ahora las víctimas ya no son campesinos de organizaciones sociales acusados de ser guerrilleros, como en los primeros años. Estos primeros falsos positivos llamaban la atención de los medios y las protestas de varios actores sociales.

Ahora las fuerzas armadas secuestran jóvenes en los barrios marginales de las grandes ciudades, o sea una población más vulnerable cuya desaparición no llama la atención. Estos jóvenes son llevados hacia áreas rurales en donde se simula un enfrentamiento con el ejército y estos jóvenes son dados de baja y

registrados como integrantes de grupos emergentes o de criminalidad común. Luego son enterrados en fosas comunes como NN. Esto genera mucha menos atención de los medios de comunicación y ha favorecido una difundida impunidad.

Las razones de estos homicidios son los sistemas de incentivos y premios que el alto gobierno ha venido implementando. Cada guerrillero o criminal dado de baja es recompensado generosamente en términos económicos y de licencias. Por esta razón se ha creado este macabro mercado de cuerpos humanos cazados. Para algunos militares la vida humana de un inocente vale menos que unos días de vacación<sup>53</sup>.

### *El Acuerdo militar con Estados Unidos*

El acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos comenzó a trascender a mediados de julio de 2009. Estados Unidos lo justificó en la necesidad de sustituir el cese de operaciones del puesto de Operaciones de Avanzada (FOL por su sigla en inglés) de Manta en

Ecuador desde donde Estados Unidos dirigía la lucha aérea contra el narcotráfico en la región andina.

Este apoyo colombiano a Estados Unidos es, en opinión del presidente del Diálogo Interamericano, Peter Hakim, de alguna forma lógico, dado que el Gobierno de Bogotá "desea mantener el apoyo de EE.UU. y tener una buena relación con el Gobierno de Barack Obama"<sup>54</sup>.

Esta buena relación entre Bogotá y Washington, cultivada en los ocho años de Gobierno de George W. Bush, necesita ser ahora sustentada, ya que aún está en juego el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, pendiente de aprobación en el Congreso de EE.UU.

El acuerdo que ya negocian Bogotá y Washington establece el uso por parte de Estados Unidos de siete bases colombianas, entre las que se encuentra la famosa base Palanquero, para actividades antidrogas y terrorismo.

Colombia autorizaría la presencia en sus bases de un máximo de 800 militares y de 600 contratistas civiles del Pentágono u otros organismos de seguridad estadounidenses por un periodo de 10 años y Estados Unidos haría una inversión de 5.000 millones de dólares.

<sup>53</sup> Simone Bruno: "El escándalo de los falsos positivos", 30 de octubre de 2008. En <http://alainet.org/active/27176>

<sup>54</sup> EFE El cierre de las operaciones de EEUU en Manta afecta la seguridad de la región, 17 de julio de 2009

### *Cumbres de UNASUR en Quito y Bariloche*

Las repercusiones negativas que se dieron en la región al conocerse el compromiso militar entre Colombia y Ecuador fueron motivo de dos cumbres sucesivas de UNASUR.

Antes de cumbre de Quito a la que Uribe decidió no concurrir, el presidente colombiano recorrió en tiempo record los países de la región con los que mantiene mejor relación para justificar su ausencia en la cumbre y explicar detalles del convenio Bogotá-Washington.

Esta primera cumbre, realizada en Quito, el 10 de Agosto de 2009, no alcanzó un pronunciamiento común sobre el acuerdo militar que negociaban Colombia y Estados Unidos por lo que los cancilleres decidieron en ese encuentro convocar a una nueva Cumbre para volver a debatir ese tema.

El 28 de Agosto de 2009 se realizó en Bariloche una cumbre extraordinaria de UNASUR para tratar las repercusiones del acuerdo militar de Colombia con Estados Unidos. Fueron siete horas de discusiones que mostraron diferencias de fondo entre los países miembros que

exceden el acuerdo Washington-Colombia. Álvaro Uribe fue blanco de las más duras acusaciones y finalmente logró salir sin una condena explícita de sus pares por prestar siete de sus bases militares para que las tropas norteamericanas operen desde allí, oficialmente contra el narcotráfico y el terrorismo<sup>55</sup>.

Un convenio que desde el primer momento despertó malestar en la región, a punto tal que el presidente venezolano Hugo Chávez llegó a presagiar “vientos de guerra”. El presidente de Perú Alan García, país con el cual Estados Unidos tiene un TLC que había entrado en vigencia el 1 de febrero, fue el único que le prestó un leve apoyo al presidente colombiano. Las posiciones más duras las mantuvieron Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa.

Fueron los mandatarios de Chile, Brasil y Argentina los que intentaron limitar los dardos y se esmeraron por frenar el círculo vicioso al que se llegaba a cada rato. Pero no por eso escondieron su preocupación en exigirle a Colombia que garantice que la presencia de fuerzas militares extranjeras no amenazaba la

<sup>55</sup> Aunque no consiguió el consenso necesario Evo Morales propuso firmar el rechazo de cualquier base militar en la región.

soberanía de la región. Una vez que Uribe expresó que el acuerdo “se rige por el principio de la integridad territorial de los Estados”, los mandatarios se concentraron en su rol de mediadores. La experiencia y popularidad de Lula Da Silva colaboraron para evitar una condena a Colombia, no a causa de un apoyo a la política de defensa de ese país sino para evitar un quiebre en la UNASUR.

El eje político bolivariano reclamó a Uribe que mostrara el convenio Washington-Bogotá para despejar tantas dudas y discutir sobre el material real. El Ejecutivo colombiano alegó no haber llevado copia del convenio dado que el mismo se encontraba terminando la fase de revisión técnica para luego ser firmado por los dos países, hecho que efectivamente sucedió en Bogotá el 30 de octubre de 2009 con el nombre de “Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos de América”.

Hugo Chávez intervino para presentar un documento denominado Libro Blanco. Comando de Movilidad Aérea (AMC), que detalla la necesidad de establecerse en Colombia no sólo para combatir el narcotráfico sino también para poder

desplazarse por toda la región. Pero Uribe alegó que “se trata de un documento académico” que no tiene implicación en la política de seguridad que la Casa Blanca emprenderá con respecto al convenio de cooperación militar. “El alcance del acuerdo abarca inteligencia táctica y operativa pero no estratégica. Lo reduce al tema del narcotráfico y el terrorismo en territorio colombiano”, volvió a justificarse el mandatario.

Rafael Correa propuso que el Consejo de Defensa Sudamericano de Defensa sea el que realice la verificación del documento militar presentado por Chávez y estudie nuevas medidas de confianza mutua idea que fue incluida el “Proyecto de decisión”. “El acuerdo está cerrado, pero no tenemos inconveniente en que lo mire el Consejo de Defensa Sudamericano de UNASUR, sin prescindir de la OEA”, afirmó finalmente Uribe alcanzando así el primer consenso de la tarde.

El presidente Uribe logró incluir un consenso en torno a la necesidad de combatir el terrorismo y a los grupos ilegales, que no tuvo objeción en la cumbre. En cambio no fue bien recibida la propuesta de Uribe de declarar terroristas a los grupos guerrilleros

colombianos y penalizar el consumo de drogas en los países sudamericanos.

Finalizado el encuentro, el canciller venezolano terminó por decir “si bien el documento no lo expresa, la reacción contra Colombia fue casi total. Su tarea es dividir Unasur y generar tensión en el continente”

Según Juan Gabriel Tokatlián desde mediados de los noventa el Comando Sur se ha ido transformando en el etnarca militar de Estados Unidos para el Caribe y América Latina

Estacionado en la Florida el Comando Sur tiende a comportarse como el principal interlocutor de los gobiernos del área y el articulador cardinal de la política exterior y de defensa estadounidense para la región. El perfil proconsular del Comando Sur se observa y comprueba mediante el análisis empírico del vasto conjunto de iniciativas, acciones, desembolsos, ejercicios, datos y manifestaciones que diseña y ejecuta en torno de las relaciones continentales. El restablecimiento de la IV Flota es apenas uno de los últimos indicadores de una ambiciosa expansión militar en la región que no contó con ningún cuestionamiento del Departamento de Estado ni de la Casa Blanca.

En ese sentido, el uso de varias instalaciones militares en Colombia le facilita al Comando Sur lograr parte de su proyecto proconsular: ir facilitando -naturalizando- la aceptación en el área de un potencial Estado gendarme en el centro de América del Sur. El mensaje principal es para Brasil y no para Venezuela. Más allá de las coincidencias políticas y de negocios entre Brasilia y Washington, Estados Unidos buscará restringir al máximo la capacidad de Brasil en el terreno militar y buscará acrecentar su propia proyección de poder en la Amazonia<sup>56</sup>.

Con una simple maniobra diplomática Estados Unidos demostró que el recientemente creado Consejo Sudamericano de Defensa de inspiración brasileña es, hasta ahora, un tigre de papel. América del Sur.

### *Uribe denuncia a Chávez ante la OEA*

El último de los grandes conflictos de Álvaro Uribe con los gobiernos de los países vecinos se produjo con Venezuela. En el momento en que el presidente Hugo Chávez debe enfrentar

<sup>56</sup> Juan Gabriel Tokatlián: ¿Bye bye Consejo Sudamericano de Defensa? *Página 12*, 7 de agosto de 2009.

elecciones legislativas clave en septiembre se produce la denuncia a su gobierno ante la OEA, por parte del saliente presidente colombiano.

El jueves 22 de julio de 2010, el embajador de Colombia denunció ante el Consejo Permanente de la OEA que grupos guerrilleros colombianos están “consolidados” y “activos” en territorio venezolano, por lo que solicitó se envíe una comisión internacional a Venezuela para que verifique su acusación, durante un tenso debate en el organismo hemisférico sobre el tema.

En una entrevista con un medio colombiano, el día miércoles previo a la reunión, el embajador Luis Hoyos declaró que no buscaría una condena contra el gobierno venezolano, sino que la denuncia sería con el fin de exigir a Caracas que cumpla con sus obligaciones y coopere “por fin” en la lucha antiterrorista como lo hacen todos los países de la región y que “cumpla las normas internacionales” que le prohíben permitir la presencia de grupos terroristas en su territorio.

Hoyos explicó que el gobierno del presidente Uribe se vio obligado a acudir a la OEA con su denuncia ante la imposibilidad de lograr la cooperación bilateral de Caracas. Según el gobierno colombiano en numerosas ocasiones ha

informado al gobierno venezolano sobre campamentos de la guerrilla en ese país, pero que Caracas ha alegado siempre que se trataba de información errónea o falsa.

La reunión extraordinaria fue convocada el día miércoles por el presidente de turno del Consejo Permanente de la OEA, el salvadoreño Joaquín Alexander Maza, después de que su predecesor en el cargo, el embajador ecuatoriano Francisco Proaño, presentara el martes por la noche su dimisión ante presiones de su propio gobierno para que no convocara a sesión el jueves.

La cancillería de Ecuador negó en un comunicado haber pedido a Proaño no convocar la reunión, aunque reconoció que “sí se le solicitó posponerla para dar oportunidad al diálogo” y no “tratar de forma precipitada un asunto que podría (poner) en riesgo el mantenimiento de la paz en la región”.

El representante de Colombia ante la reunión extraordinaria de la OEA, Luis Hoyos, señaló la presencia creciente de estas bandas del terrorismo en el hermano país de Venezuela donde afirmó que hay unos 1500 guerrilleros en decenas de campamentos y que por eso

se requiere “se constituya una comisión internacional para ir a estos sitios”<sup>57</sup>.

Hoyos presentó un nutrido *dossier* 10 videos, 12 testimonios de desmovilizados, más de 20 fotografías y las “coordenadas y datos contundentes” de algunos de los supuestos campamentos de las FARC y el ELN en la selva venezolana, desde donde las guerrillas lanzarían ataques a territorio colombiano cruzando la frontera volviéndose a refugiar en sus bases en el país vecino.

Ante las supuestas pruebas, Venezuela desestimó la denuncia y la tildó de “circo mediático”. El representante venezolano ante la OEA, Roy Chaderton, dijo que en la denuncia colombiana no hay “ninguna evidencia, ninguna prueba, y sólo incluye fotos muy curiosas tomadas no sé de dónde”. Admitió que es difícil que no se filtren guerrilleros o paramilitares por la frontera común de más de 2000 kilómetros, pero denunció la “incompetencia” del gobierno de Uribe para resguardar su frontera<sup>58</sup>.

Dado que no hubo aceptación de la conformación de la comisión, el

secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, llamó a Colombia y Venezuela a superar esta crisis.

Ese mismo día de la denuncia ante la OEA, Chávez rompió las relaciones diplomáticas con Colombia. La tensión bilateral ya se había incrementado en julio del 2009, cuando Chávez decidió “congelar” las relaciones con Bogotá tras el acuerdo militar con Estados Unidos, lo que, en la práctica, implicó el recorte del grueso las exportaciones colombianas a Venezuela

Chávez, que negó cualquier aval de su gobierno a la presencia de guerrilleros colombianos en su territorio y puso a sus tropas en alerta, llegó a decir que la denuncia de Uribe intentaba justificar un ataque militar a Venezuela, algo descartado enérgicamente por el gobierno de Uribe. Santos, por su parte, evitó realizar declaraciones sobre el diferendo bilateral y dijo que ésa era “su mayor contribución” para no agudizar la crisis<sup>59</sup>.

Posteriormente ambos países prefirieron bajar el tono, Chávez pidió a la guerrilla que revisara su estrategia armada para no convertirse en una “excusa para la injerencia de Estados Unidos” en la región y el vicepresidente electo

<sup>57</sup> “Bogotá presenta pruebas de la presencia activa de guerrilleros en territorio colombiano”. La Jornada 23 de julio de 2010. En [www.jornada.unam.mx/2010/](http://www.jornada.unam.mx/2010/)

<sup>58</sup> “Colombia presenta sus pruebas ante la OEA”, Página 12, 22 de julio de 2010. En [www.pagina12.com.ar/.../4-149929-2010-07-2](http://www.pagina12.com.ar/.../4-149929-2010-07-2)

<sup>59</sup> LA NACIÓN: “Chávez pedirá a la Unasur apoyo para un plan de paz”, 28 de julio de 2010. En <http://www.lanacion.com.ar/>

colombiano, Argelino Garzón, elogió las declaraciones del líder venezolano<sup>60</sup>.

### *Reunión extraordinaria de cancilleres de UNASUR en Quito*

El canciller de Venezuela Nicolás Maduro inició una gira regional con el propósito de buscar apoyo ante las acusaciones de Colombia sobre la presunta connivencia del gobierno de Hugo Chávez con las FARC. El lunes 26 de julio, en Buenos Aires se reunió con la presidente Cristina Kirchner y expresó al Secretario General de UNASUR, Néstor Kirchner, que el gobierno venezolano exigirá una “rectificación” a fondo de Bogotá. Al mismo tiempo pidió ayuda a los países de la región para impulsar un proceso de paz en el plano continental. Se trató de un pedido directo al mandatario electo de Colombia, Juan Manuel Santos, que asumirá el 7 de Agosto. Santos también fue recibido por la presidente y por Néstor Kirchner.

---

<sup>60</sup> No es la primera vez que Chávez realiza llamados a la guerrilla en favor de la paz. El 8 de junio de 2008 el presidente Hugo Chávez durante su programa “Aló Presidente” exhortó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a que liberen a todos los rehenes, civiles y militares. “Llegó la hora de que las FARC liberen a todos los que tienen allá en la montaña. Sería un gran gesto humanitario, a cambio de nada. Así lo planteo yo ahora que hay un nuevo jefe (Alfonso Cano). Este podría ser el primer paso para que se acabe la guerra interna en Colombia”.

“Nuestro gobierno presentará en la reunión de UNASUR en Quito una propuesta concreta que permita canalizar una metodología para un plan de paz”, dijo Maduro, que se mostró confiado en que esa reunión “inicie un camino hacia una nueva etapa de construcción de paz”, en el plano continental. “Los mecanismos, la metodología y el plan tienen que construirse en América del Sur”, consideró el diplomático venezolano<sup>61</sup>.

Al día siguiente, el martes 27 de julio, Colombia rechazó discutir un “plan de paz” que Caracas llevará a la reunión de cancilleres en Quito, y advirtió que no hará una rectificación a su denuncia de presencia de guerrillas colombianas en Venezuela, dijo el canciller Jaime Bermúdez. Para el gobierno de Uribe el sólo planteamiento de un plan de paz en UNASUR constituye una intervención en asuntos internos colombianos.

El presidente colombiano Álvaro Uribe criticó el 27 de julio, la posibilidad de una propuesta de paz con las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN, en un acto en el ministerio de la Defensa, a diez días de dejar el poder.

“Algunos quieren hacer equivocar a Colombia de nuevo, para aflojarle el

---

<sup>61</sup> LA NACIÓN: “Chávez pedirá a la Unasur apoyo para un plan de paz”, 28 de julio de 2010. En <http://www.lanacion.com.ar/>

pescuezo a la culebra a fin de que vuelva a tomar oxígeno y nos vuelva a envenenar. Cuidado con eso. Algunos hablan de paz, pero ignoran la seguridad”, dijo Uribe.

En su discurso, el presidente colombiano criticó que se quiera “internacionalizar” la demanda de un posible diálogo con las guerrillas, aunque sin mencionar directamente a ningún país.

“En esa trampita no vamos a caer. Solamente demandamos de la comunidad internacional cumplir las normas internacionales que nosotros cumplimos: luchar contra el terrorismo y no albergarlo en parte alguna”, señaló Uribe<sup>62</sup>.

El canciller venezolano propuso en Quito un plan de paz “civilizado”, por la vía de la negociación política”, para “acabar con la guerra que hay en Colombia y que afecta a la región”. Recordó que, a consecuencia del conflicto interno en Colombia, existen cuatro millones de colombianos refugiados, muchos de ellos en Venezuela, por lo que considera debe irse a un planteamiento de paz<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Uribe dice que propuesta de paz de Venezuela da oxígeno a grupos guerrilleros”, 27 de julio de 2010. En <http://telesurtvnet>

<sup>63</sup> “Venezuela propone un plan de negociación política para poner fin a la guerra en Colombia”, Quito, 30 de julio de 2010. En <http://www.yahoo.com/>

La cumbre extraordinaria de UNASUR, realizada en Quito el 29 de julio, terminó tras cinco horas de debate sin un documento oficial de consenso aunque se acordó en convocar a una próxima reunión de presidentes para discutir los puntos en los que se avanzó en el encuentro que buscaba aliviar las tensiones entre Colombia y Venezuela.

Durante el encuentro, el Gobierno de Brasil puso sobre la mesa de la reunión una propuesta de cinco puntos en la que comienza con la declaración de Sudamérica como zona de paz, se destaca el compromiso de Colombia y Venezuela de resolver sus diferencias, y que ambos países luchen en contra de los grupos armados ilegales, en particular los vinculados al narcotráfico.

### *Las guerrillas proponen “diálogos de paz” a Santos y a la UNASUR*

En un video divulgado el 30 de julio por Internet el máximo jefe de la guerrilla colombiana de las FARC Alfonso Cano, propuso al presidente electo de Colombia Juan Manuel Santos iniciar un diálogo de paz.

“Seguimos empeñados en buscar salidas políticas. Aspiramos que el gobierno que

entra no engañe más al país, aseguró Cano en un mensaje que hizo extensivo a “los doce países miembros de la UNASUR.

Cano condicionó el diálogo con Santos a la discusión de cinco temas, entre ellos, el acuerdo militar con EEUU, derechos humanos, régimen político y un nuevo modelo económico<sup>64</sup>.

Mientras que Uribe descartó cualquier posibilidad de diálogos de paz, tomando distancia del anterior el próximo gobierno colombiano estaría dispuesto a dialogar con las FARC, siempre y cuando ese grupo libere a todos los rehenes y cese las prácticas violentas. Así lo dijo el 31 de julio el vicepresidente electo Angelino Garzón.

“El gobierno de Juan Manuel Santos no tiene cerrada la puerta de la paz, pero le estamos exigiendo a la guerrilla poner en libertad a todos los secuestrados, cesar la práctica del terrorismo y las minas antipersonales y liberar a los niños reclutados de manera forzada”.

“Si ellos (las FARC) dan esas manifestaciones tengan por seguridad que Santos tendrá toda la generosidad para construir acuerdos de paz y procesos de perdón y reconciliación, en

medio de una reparación a las víctimas de la violencia”<sup>65</sup>

El ELN se sumó a la propuesta de paz enunciada por las FARC. En un comunicado con fecha 4 de agosto y divulgado por Internet firmado por Nicolás Rodríguez, alias “Gabino” y Antonio García, primero y segundo comandante del ELN.

La organización guerrillera expresa: “consideramos de la mayor seriedad la propuesta de paz que desde el gobierno de Venezuela se ha manifestado. Desde ya nos disponemos a intercambiar con el Gobierno venezolano y otros Gobiernos del continente para explorar los caminos que hagan posible la paz en Colombia y en nuestra América”.

La guerrilla manifestó su intención de trabajar para construir una salida política al conflicto interno de Colombia, en los marcos de una propuesta de paz para el continente, vinculante a los esfuerzos de los países que integran UNASUR y de otras iniciativas de acompañamiento que desde la comunidad internacional surjan”.

Por otra parte el texto señala que el gobierno de Uribe y su sucesor han querido vender la idea que la

<sup>64</sup>Clarín: “Las FARC proponen a Santos un diálogo de paz”, Clarín, 31 de julio de 2010.

<sup>65</sup>Clarín: “Santos acepta un diálogo con las FARC si dejan la violencia”. Clarín, 1 de Agosto

insurgencia colombiana, y en particular el ELN se niegan a construir un camino hacia la paz. Con ello se pretende negar lo que en diversos procesos de paz se ha intentado, en los cuales los gobierno de turno lo único que les interesa es que las guerrillas se desmovilicen y desarmen, impidiendo de plano los cambios estructurales que son las verdaderas causas del conflicto interno colombiano”.

Denuncian, por último, que tanto Estados Unidos como la "oligarquía colombiana" pretenden "internacionalizar el conflicto colombiano" para usarlo "como pretexto para intervenir militarmente en los países vecinos" y afectar de esta manera "los procesos democráticos y de cambios sociales" que se construyen en Latinoamérica.<sup>66</sup>

En una carta publicada el 1 de septiembre de 2009 en la página de Internet del grupo rebelde, dirigida al mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, como presidente pro t mpore de UNASUR, el ELN afirma que se debe considerar que una salida a la guerra en Colombia pasa por la soluci n a los

<sup>66</sup> Ecodiario. Colombia/Venezuela. El ELN estudia reunirse con Venezuela par “explorar los caminos” hacia la paz en Colombia. Em <http://ecodiario.economista.es/internacional/noticias>. Bogot , 8 de Agosto de 2010.

actuales conflictos con Venezuela y Ecuador. Para ello, ofrece su respaldo a los esfuerzos para buscar salidas de paz a los "conflictos entre naciones hermanas y al interior de cada pa s". "Nos sumamos a este camino, que usted (Correa) junto a otros l deres latinoamericanos encabezan en este momento y por ello le solicitamos a Unasur que acompa e un proceso de soluci n pol tica al conflicto interno colombiano".

El Comando Central de la guerrilla colombiana a ade que el prolongado conflicto "social y armado" que consume a Colombia "demanda del apoyo latinoamericano" para buscar una salida pol tica. "Conflicto agravado por la injerencia ininterrumpida de Estados Unidos", agrega el comunicado.

## *Conclusiones*

Con cintura pol tica Uribe logr  transformar cada lucha contra las FARC y el narcotr fico en una victoria personal. Al finalizar su  ltimo mandato, dentro de las fronteras colombianas la popularidad de Uribe rozaba los 70 puntos. Hacia afuera, en cambio se encontr  cada vez m s aislado y golpeado con los dardos que se

arrojaban con principales vecinos. Uribe no estuvo dispuesto a dar marcha atrás y siempre aseguró que sin el apoyo norteamericano y sin la cooperación de los países vecinos le era imposible poner fin a los problemas internos.

Si bien, según fuentes oficiales, la Política de Seguridad de Uribe ha sido exitosa en el sentido de que ha logrado reducir significativamente la violencia política, los secuestros e incidentes armados, así como la violencia social y los índices de homicidios, lo central es que el objetivo mismo de esta política, la derrota de las organizaciones armadas, no se ha conseguido, con lo cual el conflicto continua latente, sin vistas a la planificación de una salida negociada.

Aunque no refleje en la voluntad popular, la Política de Seguridad Democrática presenta también demasiados puntos oscuros: las vinculaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico, los millones de desplazados por el conflicto, la persecución y asesinato de sindicalistas y líderes de organizaciones sociales, el escándalo de los falsos positivos y las fosas comunes como la de La Macarena, el espionaje ilegal montado por el DAS, etc.

En cuanto a la internacionalización o regionalización del conflicto colombiano, Uribe ha insistido en involucrar a los países vecinos en su guerra interna y exigiendo la cooperación de los países de la región para su política de victoria militar sobre las guerrillas, en las condiciones pautadas por él.. Ha buscado imponer en Colombia una paz por imposición, siendo que la historia ha demostrado que la victoria militar sobre las guerrillas no está a la vuelta de la esquina..

Los conflictos se han presentado cuando los gobiernos de los Estados vecinos pretenden llevar adelante políticas autónomas con respecto a Estados Unidos como es el caso de los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa.

Brasil, que ha realizado algunas concesiones al gobierno de Uribe a los fines de no quebrar la unidad sudamericana también ha sido desafiado por las políticas de Uribe al alinearse con la estrategia de defensa global y regional de los Estados Unidos. El acuerdo militar con Estados Unidos pone en entredicho el objetivo de generar una identidad sudamericana de defensa pretendido por su cuidado proyecto de Consejo de Defensa Sudamericano.

La política de internacionalización del conflicto colombiano pone también en tela de juicio la capacidad de las instituciones regionales para dirimir diferencias y crear políticas en conjunto. Es conclusión central de este trabajo que la única cooperación posible con Colombia debe ser discutida a nivel regional, sin la presencia norteamericana y que esa cooperación debe estar encaminada a obtener una paz integral y definitiva al conflicto interno armado de Colombia, una paz por negociación. Una propuesta tutelada por UNASUR y aceptada por Colombia en este sentido es lo más acorde.

La senadora liberal Piedad Córdoba ha declarado que finalmente el presidente Santos terminará negociando con la guerrilla y en esta decisión también pesa la necesidad de tomar distancia del uribismo y de su propia responsabilidad que enturbian su pasado reciente como Ministro de Defensa del gobierno de Alvaro Uribe.